

Unión Progreso y Democracia


PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN Nº

1

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada de Unión Progreso y Democracia, doña Rosa Díez González, formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del Debate de Política General en torno al estado de la Nación, la siguiente propuesta de resolución **sobre la protección de los concejales en el País Vasco** para su debate en el Pleno

Congreso de los Diputados, en Madrid a 27 de junio de 2011


Dña. Rosa Díez González

Diputada de Unión Progreso y Democracia



Portavoz de GP Mixto

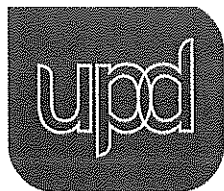
Algunos alcaldes de la coalición Bildu han anunciado la decisión de impedir el acceso a las sedes de sus ayuntamientos a los escoltas de los concejales de PSE y PP, además de disposiciones complementarias como la retirada de arcos detectores de metales y de otros dispositivos y protocolos destinados a luchar contra la comisión de atentados terroristas. Esta medida ya ha sido adoptada oficialmente en el ayuntamiento guipuzcoano de Andoain, mientras otros ayuntamientos vascos y navarros gobernados por Bildu han anunciado su intención de hacer lo mismo.

Los servicios de escolta que protegen a los concejales amenazados en el País Vasco y Navarra, así como los detectores de metales y otras medidas de seguridad, fueron adoptados a raíz de los numerosos atentados, asesinatos y secuestro de concejales del PP, PSE y UPN por la banda terrorista ETA. También para proteger a los concejales y alcaldes, y a multitud de otros cargos públicos y personas pertenecientes a colectivos amenazados (magistrados, periodistas, empresarios, etc.), no sólo de los atentados terroristas, sino también del acoso sistemático de la *kale borroka* y las múltiples formas de intimidación y acoso desplegadas por la banda y su entorno político para expulsar de las instituciones o, al menos, marginar al máximo a los representantes de partidos contrarios a los fines de ETA, impidiendo el libre y normal desarrollo de su actividad política.

Es importante comprender que la protección a los concejales amenazados por ETA no sólo pretende preservar su vida e integridad, sino también mantener un mínimo de calidad democrática en las instituciones políticas vascas y navarras garantizando, al menos, la existencia de la oposición democrática frente a los designios totalitarios y prácticas excluyentes de quienes se aprovechan de la violencia política y del terrorismo, activo o potencial (en *tregua*), para imponer su proyecto político como el único que gozaría de apoyo popular frente a los proyectos que no es posible defender ni promover libremente sin un altísimo riesgo de padecer violencia política y persecución bajo cualquiera de sus formas.

ETA sigue activa y sigue constituyendo una amenaza gravísima para la democracia y, en particular, para la vida y libertad de quienes no se someten a sus designios. Por tanto, la retirada de protección a los concejales de partidos vascos no nacionalistas enemigos del terrorismo no hace otra cosa que debilitar el funcionamiento de la democracia al facilitar a los terroristas la ejecución de cualquier plan de acoso e intimidación o de atentados más graves, mientras se convierte en heroísmo algo tan básico, en donde no existe esa lacra, como representar en un ayuntamiento a los vecinos de un pueblo.

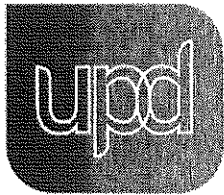
Es responsabilidad inexcusable del Estado garantizar la seguridad y la libertad de acción de todos los cargos públicos en el País Vasco y en Navarra, y en particular de aquellos señalados por ETA y



sus colaboradores como “enemigos del pueblo vasco” y, por tanto, objetivos –ellos y sus familias, amigos y compañeros- de la exclusión social y de la violencia política. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Mixto (Unión, Progreso y Democracia) presenta la siguiente propuesta de resolución al debate sobre el Estado de la Nación:

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Restablecer inmediatamente y sin dilación las medidas de seguridad de los concejales del País Vasco y Navarra, incluyendo la libertad de movimientos de sus escoltas en la totalidad de edificios municipales sin excepción ni restricción alguna, así como la de cualquier otra medida suplementaria de seguridad que se considere necesaria y que haya sido o pueda ser eliminadas en cualquier ayuntamiento.
2. Adoptar todas las medidas legales necesarias para impedir a Bildu o cualquier otro partido el debilitamiento de la seguridad y libertad de acción de los concejales y ciudadanos que hayan estado o puedan estar amenazados tanto por ETA como por cualquier grupo que colabore con la banda terrorista, procediendo si es necesario a iniciar de inmediato un proceso de ilegalización de Bildu según lo previsto en la Ley de Partidos.



Unión Progreso y Democracia

PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN Nº

2

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

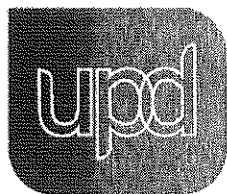
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada de Unión Progreso y Democracia, doña Rosa Díez González, formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del Debate de Política General en torno al estado de la Nación, la siguiente propuesta de resolución **sobre la suspensión del convenio entre la AEAT y la Diputación Foral de Guipúzcoa** para su debate en el Pleno.

Congreso de los Diputados, en Madrid a 29 de junio de 2011

Dña. Rosa Díez González

Diputada de Unión Progreso y Democracia

Portavoz de GP Mixto



El 26 de mayo de 2011, y por tanto una vez ya conocidos los resultados de las últimas elecciones autonómicas y municipales, el entonces Director General de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y actual Secretario de Estado de Hacienda, D. Juan Manuel López Carbajo, firmó un convenio entre el organismo que dirigía y la Diputación Foral de Guipúzcoa, que permitirá a ésta el acceso a los datos fiscales detallados de cualquier ciudadano español.

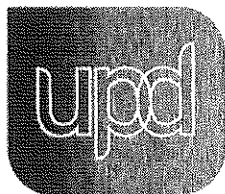
En concreto, el convenio suscrito contempla el intercambio de información tributaria entre las dos administraciones de forma electrónica e inmediata. También el acceso directo a las bases de datos de ambos organismos. Esto permitirá el acceso inmediato a los datos fiscales de todos los españoles sin que haya forma legal de evitarlo.

El convenio incluye asimismo la colaboración para la verificación del domicilio fiscal, que tiene como objeto recabar la información y las pruebas necesarias para acreditar el verdadero domicilio. A través de unidades coordinadoras se podrá obtener información mediante diversos medios sobre:

- En el caso de personas jurídicas, lugar de contratación general, lugar de gestión de la contabilidad, domicilio de administradores o gerentes.
- En el caso de personas físicas, domicilio declarado, domicilio del padrón, inmuebles en propiedad declarados en el Registro de la Propiedad y Catastro, consumos de agua, electricidad, gas y teléfono, domiciliaciones bancarias, declaraciones testificadas de vecinos, porteros, administradores de fincas, municipio en el que se desarrolla la actividad laboral o profesional, residencia habitual del cónyuge e hijos menores.

A juicio de UPyD, la firma de tal convenio constituye una grave irresponsabilidad y un escándalo. Son notorios los vínculos entre Bildu, el partido que ahora gobierna la Diputación Foral de Guipúzcoa, y el entorno de la banda terrorista ETA, que sigue plenamente activa (como demuestra la reciente detención de terroristas transportando explosivos). Este convenio extiende gratuitamente a todos los españoles los problemas que ya van a sufrir los ciudadanos guipuzcoanos. Gracias a él, la banda terrorista podría obtener legal e inevitablemente datos fiscales y personales detallados de cualquier empresario que desee extorsionar, de cualquier familia a la que desee amenazar o de cualquier ciudadano que desee asesinar.

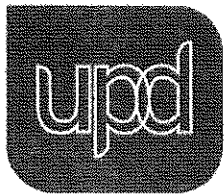
En atención a todo lo expuesto, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:



Unión Progreso y Democracia

CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL

La suspensión de manera inmediata de la aplicación del convenio arriba citado para el intercambio de datos fiscales entre la AEAT y la Diputación Foral de Guipúzcoa y lo denuncie unilateralmente.



Unión Progreso y Democracia

**PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN Nº**

3

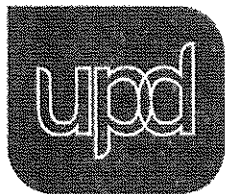
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada de Unión Progreso y Democracia, doña Rosa Díez González, formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del Debate de Política General en torno al estado de la Nación, la siguiente propuesta de resolución **sobre la creación de un 'Semestre Español' para garantizar la estabilidad fiscal y financiera del Estado** para su debate en el Pleno.

Congreso de los Diputados, en Madrid a 29 de junio de 2011

Dña. Rosa Díez González
Diputada de Unión Progreso y Democracia

Portavoz de GP Mixto



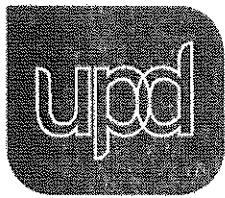
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los más graves defectos del actual modelo de organización territorial del Estado, que la presente crisis económica ha puesto de manifiesto, es la ausencia de un efectivo mecanismo de coordinación entre Administraciones en el ámbito presupuestario, fiscal y financiero que, liderado por el gobierno central, permita garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en este campo para el conjunto de las Administraciones Públicas, así como los compromisos adquiridos por España en el marco de la Unión Europea y la Unión Económica y Monetaria.

Esta carencia resulta especialmente preocupante en el caso de la coordinación de las Comunidades Autónomas entre sí y con el gobierno central. Las administraciones autonómicas gestionan ya el 36% de todo el gasto público y la experiencia del periodo transcurrido de crisis económica nos muestra que, por una parte, los desajustes presupuestarios han sido profundos y crecientes, por otra, la necesaria coordinación que permita actuar a las distintas administraciones públicas como un conjunto coherente no parece haber funcionado con éxito, más bien todo lo contrario.

Así, hemos podido comprobar que el organismo específico de coordinación, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ha sido prácticamente vaciado de funciones, al limitarse a formalizar acuerdos previamente alcanzados en reuniones bilaterales entre el gobierno central y los respectivos gobiernos de las Comunidades Autónomas. En este mismo sentido, y siendo cierto que en este órgano se establecen objetivos individuales de déficit para las Comunidades Autónomas, una vez definidos éstos, su incumplimiento no lleva aparejada sanción alguna ni ninguna otra repercusión que, respetando, la autonomía financiera de estas administraciones, garantizara la disciplina financiera. El hecho de verse obligadas a presentar planes de reequilibrio en tales situaciones no puede considerarse como una medida realmente eficaz para el fin perseguido. Y lo que es peor, el incumplimiento de los compromisos adquiridos mediante dichos planes tampoco tiene consecuencias, salvo la limitación del acceso a nuevos tramos de endeudamiento, barrera que podría quedar sin aplicación en el momento en que las Comunidades incumplidoras sean mayoría y no sea posible impedir el acceso a la financiación sin mermar la prestación de servicios esenciales al ciudadano como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Situación que podremos ver en un futuro más cercano de lo que todos deseamos.

La experiencia reciente ha demostrado igualmente que es incluso posible que una Comunidad Autónoma, amparándose de manera discutible en el citado principio de autonomía financiera, apruebe sus presupuestos sin respetar los compromisos en materia de disciplina fiscal previamente adquiridos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esto es, la necesaria corresponsabilidad fiscal y la imprescindible lealtad institucional que se requiere de las Comunidades Autónomas no se han verificado, y las continuas reformas en el sistema de



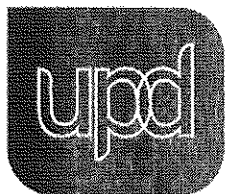
financiación -aportando recursos adicionales sin contrapartida alguna- han incentivado este comportamiento irresponsable.

En este mismo sentido, ha quedado patente la imposibilidad de que el gobierno central, responsable de la estabilidad del conjunto del Estado, controle el crecimiento presupuestado del gasto de las Comunidades Autónomas, de manera que los objetivos de déficit en los presupuestos autonómicos pueden ser fácilmente burlados simplemente elevando los ingresos previstos hasta el nivel necesario para alcanzar el desequilibrio acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Los datos de ejecución presupuestaria de las Comunidades Autónomas correspondientes al ejercicio 2010 y al primer trimestre del presente año, así como los datos de la deuda conocida de estas Administraciones que facilita el Banco de España, confirman que la ausencia de coordinación entre la Administración Central y las Comunidades Autónomas pone en riesgo la estabilidad fiscal del conjunto de las administraciones públicas, al igual que los compromisos de España como país ante las instituciones comunitarias, lo que afecta seriamente a la credibilidad de las cuentas públicas y, en definitiva, a la capacidad de acceso a los mercados financieros internacionales. La reducción del déficit del conjunto de las Administraciones Públicas hasta el 6% este año, el 4,4% en 2012 y el 3% en 2013 es un reto que requiere del compromiso de todas las partes implicadas, y que no se alcanzará si no se toman las medidas precisas para que la coordinación de todos los esfuerzos sea una realidad. En este sentido, la crisis de la deuda que actualmente está causando graves problemas en socios comunitarios como Grecia, Irlanda o Portugal, nos obliga como país a actuar responsablemente y hacer frente a nuestros compromisos con total solvencia y seriedad, y por tanto es un motivo más que apremia a avanzar en la vía de vertebrar España, en este caso en los ámbitos fiscal y financiero.

Tampoco podemos olvidar que el peso del gasto público controlado por las administraciones autonómicas es cada vez mayor, y a ellas les compete gestionar los servicios públicos fundamentales, lo que hace más urgente la necesidad de contar con un mecanismo que permita coordinar los esfuerzos para estabilizar las finanzas públicas sin menoscabar las prestaciones públicas a los ciudadanos. En definitiva, la preservación del conjunto de servicios públicos que conocemos como el *"Estado del Bienestar"* pasa por equilibrar las cuentas públicas y muy especialmente las de las Comunidades Autónomas.

Al mismo tiempo que estas graves deficiencias de coordinación interadministrativas están poniendo en entredicho la capacidad del gobierno de la Nación para garantizar la estabilidad fiscal en nuestro Estado, la Unión Europea ha puesto en marcha el mecanismo denominado *"semestre europeo"*, que consiste en un ciclo de coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros de 6 meses de duración y cuya finalidad es garantizar la estabilidad fiscal y

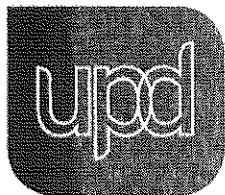


financiera del conjunto de la Unión, integrar los diferentes instrumentos de supervisión y orientar la elaboración de los Presupuestos nacionales de los Estados miembros. Mediante dicho mecanismo se pretende revisar las políticas presupuestarias de los países para detectar posibles incoherencias y desequilibrios, con el fin de reforzar la necesaria coordinación. Este procedimiento implica que las instituciones comunitarias han de revisar no sólo los presupuestos en fase previa, sino que han de aprobar los planes nacionales de estabilidad que cada país elabora anualmente, así como los programas nacionales de reforma -que afectan a todos los niveles de gobierno dentro de cada Estado-, una vez que tales programas son evaluados por la Comisión.

El ejemplo comunitario nos muestra que no sólo es necesario, sino que es posible establecer mecanismos de coordinación entre partes dotadas de autonomía, e incluso de soberanía en este caso, que preserven la estabilidad del conjunto sin menoscabo de dicha autonomía o soberanía. Si tal procedimiento tiene sentido y es posible en el ámbito comunitario, parece que cobra aún más sentido y debería ser más factible dentro de las fronteras de cada país con subniveles de gobierno dotados de autonomía fiscal y financiera.

Ciertamente, nuestra Constitución consagra el principio de autonomía de las Comunidades Autónomas en diversos artículos, como el artículo 2 o el 137, y concretamente en el ámbito financiero, en el artículo 156. Pero no es menos cierto que la Constitución otorga al Estado el papel de coordinación y supervisión general, también en materia fiscal y financiera, papel al que ha renunciado, bajo los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP, para satisfacer objetivos políticos partidistas. La actual impotencia e incapacidad manifiesta no es sino la consecuencia de una deriva política muy negativa que se podría haber evitado, pues la Constitución atribuye al Estado, en su artículo 149.1.13ª, las "bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica", y la competencia exclusiva sobre la "Hacienda general y deuda del Estado" en el artículo 149.1.14ª. Los artículos 103.1, 128.1, 131.1 y 150.3 también sirven de base para apoyar medidas de corrección y racionalización de las finanzas públicas como las que solicitamos con esta moción. Incluso en el mismo artículo que consagra la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas el legislador quiso dejar bien claro que la misma está supeditada a "los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles".

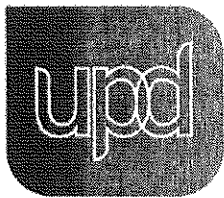
Por todo ello, y con el fin de garantizar la estabilidad fiscal y financiera del país en su conjunto, cumplir nuestros compromisos internacionales y salvaguardar los logros alcanzados en el llamado "*Estado del Bienestar*", es urgente poner en marcha un mecanismo de coordinación presupuestaria, fiscal y financiera entre el Estado y las Comunidades Autónomas que, actuando de forma similar al instrumento desarrollado en la Unión Europea, formalice un ciclo de 6 meses de duración en el que se materialice la imprescindible cooperación y coordinación inter administrativa, y que tendrá la denominación de "**semestre español**".



En su virtud el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

Aborde de manera inmediata las modificaciones en el marco regulador en materia presupuestaria, de estabilidad fiscal y de financiación de las Comunidades Autónomas que permita instaurar un mecanismo de coordinación entre éstas y el Estado a lo largo de un periodo de 6 meses, denominado "semestre español" cuya finalidad última es la de garantizar la estabilidad fiscal y financiera del país en su conjunto, cumplir los compromisos internacionales de España y salvaguardar los logros alcanzados en el llamado "*Estado del Bienestar*", y cuyos elementos fundamentales son los siguientes:

1. A comienzo del citado ciclo, el Ministerio de Economía informará a las Comunidades Autónomas, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de los principios y aspectos esenciales que han de inspirar la elaboración de cada uno de los presupuestos autonómicos en el siguiente ejercicio, y que se derivarán de los objetivos del conjunto de las administraciones públicas y de los compromisos internacionales de España, y que tendrán en cuenta la situación particular de cada Comunidad Autónoma.
2. Así mismo, en ese mismo marco multilateral, el Estado y las Comunidades Autónomas acordarán un límite máximo de crecimiento del gasto y un objetivo de déficit individual para cada Comunidad, que sean compatibles y coherentes entre sí y con los objetivos globales del conjunto de Administraciones Públicas. De no alcanzarse acuerdo, ambos límites serán establecidos por el Ministerio de Economía y Hacienda.
3. Sobre la base de dichos principios y aspectos generales, y bajo el respeto a los límites de gasto y déficit establecidos, las Comunidades Autónomas elaborarán sus proyectos de presupuestos para el siguiente ejercicio.
4. Los proyectos de todas las Comunidades serán remitidos al Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de proceder a su envío a la correspondiente Asamblea autonómica.
5. El Ministerio de Economía y Hacienda emitirá un informe para cada proyecto presupuestario en el cual se informe, de acuerdo con los principios y límite establecidos, de su conformidad con el mismo o, en caso contrario, de las recomendaciones de modificación que considere oportunas.
6. Las Comunidades Autónomas deberán modificar sus proyectos presupuestarios siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Economía y Hacienda en el caso de que no hayan obtenido la conformidad por parte de éste. Una vez modificado y con el informe de



conformidad por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, el proyecto presupuestario iniciará el habitual trámite parlamentario.

7. En caso de que el proyecto que no hubiera obtenido la conformidad por parte del Ministerio de Economía y Hacienda iniciara el trámite parlamentario sin ser modificado siguiendo las recomendaciones de éste, el gobierno de la nación podrá establecer medidas coercitivas para lograr tal modificación, entre las que se incluyen:
 - a. Denegación de la autorización para acceder a operaciones de endeudamiento.
 - b. Retrasar los anticipos establecidos en el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, así como cualquier otra transferencia corriente o de capital acordada mediante convenio.
 - c. En el caso en el que la ejecución presupuestaria autonómica provocara incumplimientos de compromisos europeos que llevaran aparejados sanción, ésta sería repercutida a las Comunidades Autónomas causantes, en la cuantía proporcional correspondiente.

Finalizado el ciclo del “**semestre español**”, que pretende coordinar los presupuestos autonómicos y el estatal antes de su aprobación y hacerlos coherentes con las necesidades y compromisos adquiridos por el conjunto de las administraciones públicas, el procedimiento de control continuará de manera similar al establecido en la actualidad, y que se describe a continuación:

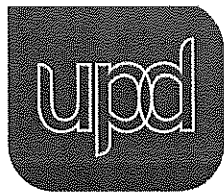
8. Superado el trámite de aprobación parlamentaria en cada Comunidad Autónoma, éstas deberán remitir información trimestral sobre la ejecución presupuestaria al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Una vez remitida, el Ministerio de Economía y Hacienda informará, a través de este mismo órgano, de su conformidad con la senda de ejecución presupuestaria y en vista del cumplimiento de aspectos como crecimiento del gasto, déficit, cumplimiento de planes de reequilibrio, etc. En el caso de que no existiera tal conformidad, el Ministerio emitiría las recomendaciones que considere oportunas y la Comunidad Autónoma correspondiente deberá enviar al Consejo un plan de reequilibrio con detalle de las medidas concretas para corregir las desviaciones observadas. Así mismo, el Ministerio de Economía y Hacienda podrá poner en práctica las medidas coercitivas para corregir los desequilibrios e incumplimientos detectados, entre las que se encuentran las citadas anteriormente.
9. Finalizado el ejercicio se repetirá el procedimiento de control sobre el presupuesto finalizado, de manera similar al establecido para los controles trimestrales.



Unión Progreso y Democracia

CONSEJO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

A través del “**semestre español**” se persigue garantizar la estabilidad financiera del conjunto de las administraciones públicas y consolidar un procedimiento eficaz de coordinación en materia presupuestaria, fiscal y financiera entre el Estado y las Comunidades Autónomas que permita a España cumplir sus compromisos internacionales como país miembro de la Unión Europea.



Unión Progreso y Democracia

PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN N°

4

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada de Unión Progreso y Democracia, doña Rosa Díez González, formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del Debate de Política General en torno al estado de la Nación, la siguiente propuesta de resolución **relativa a la fusión de municipios y la supresión de las diputaciones provinciales** para su debate en el Pleno.

Congreso de los Diputados, en Madrid a 7 de junio de 2011

Dña. Rosa Díez González
Diputada de Unión Progreso y Democracia

Portavoz de GP Mixto

La organización provincial y municipal de España tiene su origen en el primer tercio del siglo XIX. La Constitución Española, aprobada por las Cortes de Cádiz, en su artículo 310 preveía la creación de ayuntamientos en los pueblos en los que no los hubiere y resultase conveniente su existencia, siendo obligatorio en los de más de 1000 habitantes. Posteriores leyes consolidaron esta tendencia fijando en 100 personas el número mínimo para constituir un municipio. Como consecuencia de estas normas hemos llegado al siglo XXI con más de ocho mil municipios, de los cuales más de cinco mil quinientos tienen menos de dos mil habitantes y en torno al ochenta por ciento tienen menos de cinco mil.

España es de los pocos países europeos que no ha acometido desde la segunda mitad del siglo XX planes rigurosos de concentración municipal. En los que se haya fijado un mínimo de población y de extensión territorial para poder constituirse en municipio y contar con una organización propia. Incluso ha seguido en las últimas décadas el camino contrario, de forma que entre 1996 y 2009 se han producido segregaciones que afectaron a más de treinta municipios. En otros países, sin embargo, como el Reino Unido, Alemania, Bélgica, Suecia, etc. se han realizado importantes transformaciones del tamaño municipal mediante la fusión de municipios o entidades semejantes, con el objetivo de poder prestar un mejor servicio a los ciudadanos y de reforzar el gobierno local y la responsabilidad política de sus gobernantes. También Francia camina en la misma dirección y recientemente ha aprobado la Ley 2010-1563 de 16 de diciembre de reforma de colectividades territoriales. Sin olvidar que hay otros países como Grecia y Portugal que están acometiendo estas reformas necesarias obligadas por los planes de rescate a los que se han tenido que acoger.

Nuestro actual modelo municipal podía responder a las necesidades de un país con una economía prevalentemente agrícola pero no responde a los requerimientos de una sociedad moderna donde debe primar la movilidad de los ciudadanos y la prestación de servicios de calidad. Ya que es difícil, por no decir imposible, prestar servicios de calidad con ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, al carecer de la capacidad organizativa y financiera suficiente para afrontar la prestación de servicios esenciales, como el agua, viales, alumbrado, cementerio, mercado, comunicaciones con otras poblaciones, instalaciones deportivas, planeamiento urbanístico, etc. Sin embargo, estas ineficiencias derivadas del reducido tamaño de nuestros municipios se podrían superar si se fusionaran en otros de tamaño mayor para tener Gobiernos más eficientes.

Un municipio debe fundarse en un territorio y una población congruentes con las economías de escala que existen para la prestación de servicios municipales. Así con municipios de mayor tamaño se podría contar con una estructura administrativa más reducida, pero más profesional, compuesta por empleados públicos de mayor calidad, lo que dificultaría las contrataciones clientelares y la corrupción que tantas veces se amparan en la proximidad. Por otra parte se podría racionalizar la prestación de servicios públicos aprovechando las sinergias existentes y

evitando innecesarias duplicidades y redundancias. Además disminuiría el desmedido número de concejales que ahora hay en España, de los 48.733 concejales que hay en los 6.821 municipios de menos de 5.000 habitantes podría pasarse a unos 13.000 concejales, si se fusionaran en 1.000 municipios de 5.000 habitantes, lo que redundaría en una clase política más reducida, pero también mejor cualificada. Finalmente municipios de mayor tamaño facilitarían la aprobación de un sistema de financiación viable para ellos y más homogéneo en toda España.

Con la realización de estas fusiones se podría más fácilmente suprimir las diputaciones provinciales. Una estructura administrativa que proviene del Siglo XIX y que no se ha adaptado a la existencia del Estado de las Autonomías y a su distribución competencial. Por lo cual las diputaciones realizan muchas funciones duplicadas y gastan una gran parte de sus recursos –en torno al 10% –en su propio mantenimiento, y no en conseguir el cumplimiento de su objetivo esencial: garantizar la igualdad de los ciudadanos de la provincia en la recepción de los servicios municipales esenciales.

Un estudio de la Fundación Progreso y Democracia de octubre de 2010 concluyó que si se fusionaran los 6821 municipios de menos de cinco mil habitantes que hay en España en municipios de esa cifra existiría al menos un ahorro potencial de 3866 millones de euros. Aunque señaló que el tamaño más eficiente era el de 20.000 habitantes lo que permitiría un ahorro potencial de 16.142 millones de euros. Cantidades nada desdeñables que se suman a la mejora en la prestación de servicios públicos que resultaría de la fusión.

Este proceso de modernización de la Administración local para superar estructuras decimonónicas le corresponde dirigirlo al Estado - de forma similar a como se ha hecho en otros países de estructura federal - quien debe realizar las modificaciones legales oportunas para la supresión de las diputaciones y para fijar el tamaño mínimo de un municipio en España y los plazos obligatorios en que deberá realizarse. Ello sin perjuicio de que en la ejecución de ese proceso deban intervenir las Comunidades Autónomas de acuerdo con sus competencias y de que haya un periodo previo voluntario para conseguir los objetivos propuestos. Sin que esto suponga la desaparición de nuestros pueblos, si no simplemente la mejora de su gobierno.

Por todo ello,

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas legales precisas para la modernización de la Administración local española mediante la fusión de los municipios de reducido tamaño y la supresión de las Diputaciones Provinciales.

G.P.MIXTO-BNG

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El **GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO**, a instancia de, Francisco Xesús Jorquera Caselas y Olaia Fernández Davila, diputado y diputada del **BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)**, formulan, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del Debate de Política General en torno al estado de la Nación 2011, las siguientes **PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN**.

28 de junio de 2011



Francisco Xesús Jorquera Caselas
Diputado por A Coruña (BNG)



Olaia Fernández Davila
Diputada por Pontevedra (BNG)
Portavoz G.P.Mixto

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario **Mixto (BNG)** formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN RELATIVA AL IMPULSO DE POLÍTICAS SOCIALES PARA GARANTIZAR LA COHESIÓN SOCIAL

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas de apoyo económico y social para mejorar la cohesión social y restituir el bienestar de determinados colectivos afectados especialmente por la crisis económica:

1. Impulsar las reformas necesarias para admitir la dación en pago como cancelación de la totalidad de la deuda hipotecaria, así como la regulación de un proceso judicial que permita arbitrar medidas alternativas al embargo, cuando el deudor haya actuado de buena fe, tales como una moratoria en el pago de los plazos pactados, la transformación en un contrato de arrendamiento con opción a compra o la condonación parcial de la deuda.
2. Garantizar una financiación estable y suficiente a las CCAA de manera que permita:
 - A. Mantener la actual cobertura educativa y sanitaria que prestan las CCAA.
 - B. Desarrollar el catálogo de prestaciones establecido en la ley de la dependencia.
3. Incluir en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 una revalorización de las pensiones que permita a los pensionistas recuperar el poder adquisitivo perdido en el último año.
4. Impulsar un plan específico para las personas paradas de larga duración, que garantice la percepción de ayudas por parte de la persona parada, con el objeto de evitar situaciones de pobreza y exclusión social.
5. Garantizar una dotación suficiente de becas para el estudio, de manera que se garantice el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario **Mixto (BNG)** formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE POLÍTICA INTERNACIONAL

El Congreso de Los Diputados insta al Gobierno a adoptar de forma urgente las siguientes medidas en materia de política internacional, con el fin de favorecer un desarrollo de las relaciones internacionales basadas en la paz y el respeto a la soberanía de los pueblos, y que además contribuya a erradicar la escalada de agresiones bélicas y militaristas:

1. Proceder a la retirada urgente, en un plazo no superior a seis meses, de las tropas desplegadas en Afganistán, adoptando las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física de los militares españoles en tanto no sea plenamente efectiva y durante el operativo de retirada.
2. Acordar la retirada de los apoyos militares y logísticos de la misión española en Libia dentro de la denominada operación "Odisea al Amanecer", así como descartar el apoyo a cualquier eventual ampliación.
3. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección efectiva del Gobierno a los miembros de ciudadanía española que participan en la misión de ayuda humanitaria "Flota de la Libertad II. Rumbo a Gaza", instando asimismo al Gobierno del Estado de Israel a respetar de forma escrupulosa la legalidad internacional y a cesar en las agresiones ilegítimas al pueblo palestino.

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario **Mixto (BNG)** formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA, REFORMA INSTITUCIONAL Y MEJORA DEL AUTOGOBIERNO

El Congreso de Los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas en materia de regeneración democrática, reforma institucional y mejora del autogobierno:

1. Impulsar las medidas que contribuyan a profundizar en la democracia y la participación política, además de la transparencia y control de las instituciones democráticas, dando cumplimiento a la moción aprobada en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados de 21 de junio de 2011.
2. Abordar una reforma administrativa que, aunando racionalidad y austeridad de gasto público, implique la instauración de un nuevo mapa institucional local que supere la actual delimitación provincial, acometa la progresiva supresión de las Diputaciones Provinciales de régimen común, y reestructure las funciones y competencias de los entes locales en función de la realidad de cada territorio.
3. Avanzar en el desarrollo del autogobierno de Galicia, en línea a lo acordado por el Pleno del Senado de 7 de junio de 2011, procediendo a ejecutar los acuerdos pendientes sobre traspasos de competencias y a articular nuevas transferencias:
 - a. Convocar la Comisión Bilateral de Cooperación Galicia-Estado con el fin de adoptar decisiones respecto al traspaso de funciones y servicios a Galicia de competencias pendientes de desarrollar, según el Estatuto de autonomía vigente, en particular a: ejecutar los acuerdos ya suscritos sobre el traspaso de funciones y servicios relativos a Inspección de Trabajo, Becas y ayudas al estudio no universitario y Museos y Bibliotecas de titularidad estatal, y avanzar en otras como, seguro escolar o sanidad penitenciaria y aquellas que han sido propuestas formalmente por el actual gobierno de la Xunta de Galicia.

G.P.MIXTO-BNG

- b. Abordar la transferencia de la gestión de las autopistas AP-9 y AP-53, por su carácter fundamental a la hora de vertebrar el territorio gallego.
- c. Dar inicio a las negociaciones para proceder al traspaso de las líneas ferroviarias que quedarían en desuso al finalizar la construcción del AVE y el traspaso de los servicios intrarregionales, que permitan implantar un transporte ferroviario de proximidad en Galicia.
- d. Profundizar en la presencia e interlocución directa de las instituciones de gobierno de Galicia en las instituciones comunitarias cuando se aborden decisiones que afecten directamente a los sectores productivos básicos de la economía gallega.

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario **Mixto (BNG)** formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, la siguiente

**PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN MATERIA DE POLÍTICA
ECONÓMICA, ENERGÉTICA Y FISCAL**

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las siguientes medidas, dirigidas a la recuperación económica y a apoyar a los sectores productivos estratégicos:

1. Una reforma fiscal que refuerce los principios de equidad y progresividad del sistema tributario, revisando las actuales figuras impositivas con el objeto de:

- A. Incrementar la recaudación en las grandes fortunas y patrimonios.
- B. Aumentar el tipo máximo de gravamen a las rentas superiores a 100.000 euros.
- C. Aplicar el tipo de gravamen máximo a los rendimientos obtenidos de operaciones de capital de carácter especulativo.
- D. Aplicar el tipo de gravamen del 4% en el IVA a todos los productos alimenticios.

2. Una reforma de la política energética que tenga como objetivo la reducción de la tarifa eléctrica de los consumidores y que impulse las energías limpias y renovables en detrimento de la nuclear, para lo cual se impulsarán las siguientes medidas:

- A. Modificar la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, de manera que el precio de la electricidad se estipule en función de los costes de generación de cada tecnología, con el objetivo de evitar la sobrevaloración de dichos costes, sobre todo en la generación de energía nuclear e hidroeléctrica, y así evitar los "beneficios caídos del cielo".

G.P.MIXTO-BNG

B. Definir un calendario de cierre de todas las centrales nucleares actualmente existentes, e impulsar un plan para sustituir la energía nuclear por las energías renovables en el mix energético.

C. Modificar la normativa a la que se acogen los titulares de las plantas solares fotovoltaicas, con el fin de garantizar la seguridad jurídica de las inversiones realizadas con anterioridad a su entrada en vigor y cuya rentabilidad o liquidez han resultado deterioradas debido a estas modificaciones normativas.

D. Mantener para los próximos años el actual umbral de 10 kilovatios de potencia contratada para la Tarifa de Último Recurso, en tanto que el Gobierno no pueda garantizar que los comercializadores realicen ofertas a los usuarios más vulnerables por debajo de la TUR.

E. Con respecto al bono social, permitir que puedan acogerse a el los clientes con potencia contratada de 3,3 kilowatios, permitir que su gestión sea asumida por las comunidades autónomas, e impulsar un "Plan de Información" que explique el contenido y requisitos del bono, así como el procedimiento para su solicitud.

3. Impulsar las siguientes políticas de apoyo a los sectores productivos básicos y estratégicos de Galicia:

A. Dar cumplimiento a la moción aprobada en el Congreso de los Diputados el 14 de Junio del presente año, relativa a impulsar diferentes medidas para dotar a los astilleros de Navantia de la ría de Ferrol de carga efectiva de trabajo y a la oposición a introducir cambios en la normativa fiscal del Estado español que agrave la crisis que padece la construcción naval civil

B. Modificar los contenidos básicos del decreto del carbón, para adaptarlo a una estrategia económica y medioambientalmente sostenible, y que se tengan en cuenta las especificidades de las comarcas mineras de As Pontes y Meirama en Galicia.

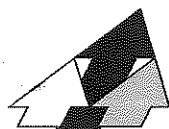
C. Defender ante la Unión Europea la eliminación de los privilegios normativos y arancelarios contenidos en el Acuerdo de Partenariado con Papúa-Nueva Guinea, puesto que constituyen un agravio para la industria conservera gallega y ponen en entredicho su viabilidad.

G.P.MIXTO-BNG

D. Garantizar la efectiva aplicación de los contratos homologados, así como impulsar las medidas necesarias para asegurar precios adecuados a los productores de leche.

4. Adoptar reformas legislativas urgentes para impedir que las empresas con grandes beneficios se acojan a expedientes de regulación de empleo (ERE) y con ello acometan recortes drásticos de sus plantillas.

5. Adoptar las medidas necesarias para que el Instituto de Crédito Oficial (ICO), se transforme en una banca pública directa, dotándolo de una red comercial propia, y orientando sus funciones a la reactivación del crédito al tejido productivo, especialmente a las PYMES.



Coalición Canaria

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Ana M^a Oramas González-Moro y Fernando Ríos Rull, diputados de Coalición Canaria, presentan, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento de la Cámara, las siguientes PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN CON MOTIVO DEL DEBATE DEL ESTADO DE LA NACIÓN DEL AÑO 2011.

Madrid, 28 de junio de 2011

Fdo: Ana M^a Oramas González-Moro

Fdo: Fernando Ríos Rull

Fdo: Portavoz del G.P. Mixto

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Nº 1

Profundización en la capacidad de autogobierno de Canarias

Canarias es un archipiélago singular dadas sus características geopolíticas que tiene recogidas determinadas especificidades tanto en la Constitución española como en el Tratado de la Unión Europea.

Sin embargo, a lo largo de la andadura autonómica, Canarias ha chocado con la rigidez e incomprensión del gobernante de turno, lo que ha evitado un adecuado desarrollo de su capacidad de autogobierno, tanto en la limitación de la vía de acceso a la autonomía –que fue en parte compensada con la aprobación de la LOTRACA-, como en el tratamiento de determinadas cuestiones tales como el reconocimiento del mar canario como parte del territorio archipelágico, o el tratamiento del régimen económico fiscal, o la capacidad de relación con países de su entorno cultural y geográfico o, en fin, la asunción de determinadas competencias directamente relacionadas con sus singularidades archipelágicas y de lejanía.

En el período 2006-2007 se alcanzó un importante acuerdo político que propició que se tramitara en el Congreso de los Diputados –tras su aprobación por el Parlamento de Canarias- un texto de nuevo Estatuto de Autonomía en el que Canarias se reconocía como Archipiélago Atlántico con importantes consecuencias en su identidad, como el reconocimiento de sus singularidades como Comunidad lejana e insular, en su modernización institucional y en su nivel competencial. Dicho texto no llegó a aprobarse definitivamente y desde entonces se han aprobado nuevos Estatutos en seis CC.AA. y se ha dictado sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña.



Complementariamente a ello, el Estatuto vigente tiene todavía pendiente determinadas el desarrollo competencial de determinadas materias tales como ejecución de la legislación laboral, políticas activas de empleo, inspección de trabajo, ordenación del litoral y costas, etc.

Por su parte, la aprobación de la Ley 44/2010, de 30 de diciembre, de Aguas Canarias significa el reconocimiento formal a nivel legal de las consecuencias que el carácter archipelágico de la Comunidad Autónoma, reconocido en el artículo 2 del Estatuto de Autonomía, implica en la delimitación de sus espacios marítimos.

Sin embargo, con anterioridad a esta ley, la proyección de las competencias de la Comunidad Autónoma sobre sus aguas territoriales tropezaba con una interpretación restrictiva por parte del Estado que llevaba a conferir un tratamiento diferente al ejercicio de las competencias autonómicas según se tratase del territorio terrestre o del marítimo. Ello condujo a que la Comunidad Autónoma de Canarias mantuviera discrepancias que hasta ahora no han podido ser resueltas por la vía del acuerdo y que han llegado al Tribunal Constitucional, en el que ahora mismo penden sobre la materia recursos o conflictos sobre las siguientes leyes:

- Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales.
- Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.



- Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se establece el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial.

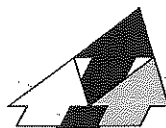
Aunque la aprobación de la Ley de Aguas Canarias tiene por sí misma un efecto modificativo o aclaratorio de todas estas disposiciones, se entiende que proporciona una mayor seguridad su modificación formal con la finalidad de adaptar la normativa sectorial a esta nueva realidad: que, como dispone el art. Único. 2 de la citada norma, “el ejercicio de las competencias estatales o autonómicas sobre las aguas canarias y, en su caso, sobre los restantes espacios marítimos que rodean a Canarias sobre los que el Estado español ejerza soberanía o jurisdicción se realizará teniendo en cuenta la distribución material de competencias establecidas constitucional y estatutariamente tanto para dichos espacios como para los terrestres”.

Por último, aún cuando la pasada legislatura se modificó el modelo de financiación de las comunidades autónomas, donde Canarias logró una parte de sus reclamaciones para poder ejercer adecuadamente parte las competencias y servicios públicos que la Comunidad Autónoma ostenta, es necesario que se atiendan las especiales dificultades de nuestras singularidades territoriales, y del intenso crecimiento poblacional de la última década, que permitan al Archipiélago una financiación suficiente para ejercer adecuadamente su autonomía política.



Por ello, se insta al Gobierno a que:

- Participe decididamente en la reforma del Estatuto de Autonomía para Canarias que contemple las singularidades propias de Canarias, en particular las derivadas de la lejanía e insularidad.
- Se agilicen los trabajos de la Comisión Mixta de Transferencias las actuaciones necesarias para posibilitar el traspaso a la Comunidad Autónoma de Canarias de funciones ejecutivas en materia de trabajo y relaciones laborales, correspondientes a la inspección de trabajo y Seguridad Social, incluidos los trabajadores extranjeros. También se procederá a la ampliación de funciones y servicios traspasados en materia de políticas activas de empleo y costas, en similares términos a los previstos en los nuevos Estatutos.
- Presente las iniciativas legislativas necesarias para que se apruebe en el próximo período de sesiones la normativa afectada por la aprobación de la Ley de Aguas Canarias de tal manera que corresponda a las Comunidades Autónomas que tengan reconocido estatutariamente su carácter archipelágico las mismas competencias en los espacios marítimos que tienen asumidas en los espacios terrestres, en particular, en materia de hidrocarburos, medio ambiente, espacios naturales protegidos e instalaciones de producción de energía.
- Corrija el déficit de la financiación de Canarias producida entre los años 2002 y la actualidad, que sitúa para Canarias por debajo de la media de las comunidades autónomas de régimen común. La revisión de la financiación de las competencias, en particular las sanitarias, habrá de realizarse tomando como referencia la población de hecho realmente atendida.



Coalición Canaria

**PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN Nº**

10

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 2

Régimen económico y fiscal

El Régimen Económico Fiscal (REF), verdadera constitución económica de Canarias, necesita de una actualización profunda en el marco de nuestra condición RUP de la UE con el objetivo de adaptarlo a las necesidades actuales de la economía canaria. Esa actualización habrá de producirse dentro de la estrategia comunitaria renovada para las regiones ultraperiféricas.

Por ello, se insta al Gobierno a que promueva una reforma del REF que afecte a las siguientes cuestiones:

Medida 1. Deducción por la creación de empleo en Canarias.

Debido a sus singularidades y condicionantes geográficos y estructurales, Canarias está sufriendo con especial virulencia el desempleo provocado por la crisis económica.

Para corregir este desequilibrio y, por tanto, con pleno respeto al ordenamiento jurídico comunitario en materia de competencia, se establecerá una deducción en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, en línea con las medidas de bonificación y fomento del empleo contenidas en la Ley 19/1994, que tendrá carácter temporal.

Se beneficiarán de la medida las empresas y autónomos canarios que incrementen sus plantillas medias por empleo creado en las Islas. También podrán beneficiarse de la deducción las entidades no residentes en Canarias que operen en su ámbito territorial siempre que creen empleo con carácter general y en proporción a su actividad, resultados y plantilla en Canarias.

Medida 2. Deducción para el impulso y la diversificación de la inversión productiva.

Las singularidades de la economía canaria motivaron el establecimiento, en el marco del régimen económico y fiscal vigente y el ordenamiento comunitario, de una deducción específica para inversiones en Canarias cuya configuración debe ahora adaptarse a la nueva realidad económica de las islas para el impulso de la actividad y la diversificación de la inversión productiva en su ámbito, con especial atención al empleo, formación y rehabilitación turística.

Por todo ello, se mejorará la vigente deducción operando sobre los porcentajes, límites y plazos aplicables para que mantenga su carácter incentivador y compensador de las ineficiencias derivadas de la condición de región ultraperiférica.

Medida 3. Línea de préstamos ICO.

En el marco del artículo 22 del actual REF] y dado el hecho insular dentro del marco jurídico de las regiones ultraperiféricas la aplicación de las líneas de mediación destinadas a financiar inversión del Instituto de Crédito Oficial hasta el 1% del PIB de las Islas Canarias. Asimismo, estudiar las oportunidades de financiación directa del Instituto de Crédito Oficial a proyectos de las Islas Canarias, y realizar un seguimiento periódico de estas actuaciones.

Impulsar convenios de colaboración entre las autoridades canarias responsables de política de financiación y el Instituto de Crédito y Oficial.



Prestar especial atención y seguimiento a la aplicación de los nuevos productos e instrumentos del Instituto de Crédito Oficial —el Fondo de Economía Sostenible, la línea ICO directo y el facilitador financiero— en las Islas Canarias.

Reforzar la colaboración entre el ICO y las Sociedades de Garantía Recíproca canarias con objeto de utilizar todos los canales financieros posibles para hacer llegar la financiación a esa región.

Medida 4. Incentivos específicos para la internacionalización de Canarias.

Para el fomento de la internacionalización de la economía canaria y la atracción de inversiones productivas se establecerán incentivos en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que complementen las medidas ya previstas a tal efecto en el REF y que sean compatibles con el ordenamiento jurídico comunitario.

Medida 5. Mejora de la Zona Especial Canaria.

Se impulsará la tramitación de la proposición de ley presentada en el Congreso de los Diputados por Coalición Canaria para adaptar la Zona Especial Canaria al nuevo contexto económico y se agilizará al máximo la obtención de las pertinentes autorizaciones comunitarias en aquellos casos en que resulte necesario.

En particular, se flexibilizarán sus requisitos geográficos y objetivos, los límites aplicables y su compatibilidad con otros incentivos fiscales para contribuir a la diversificación de la economía canaria y su competitividad y atraer inversiones.

Medida 6. Bonificación al transporte marítimo.

Se adoptarán las medidas necesarias para la mejora de las subvenciones al transporte de mercancías, aumentando la cobertura hasta el 65% en el año 2011, incluyéndose una partida para la subvención del transporte del Plátano, en los términos de la normativa europea.

El Real Decreto que de soporte a esta medida deberá estar aprobado antes que finalice el tercer trimestre del año 2011.

Medida 7. Tarifa de pasajeros en los aeropuertos canarios y Bonificación de tasas para el incremento de pasajeros con Canarias.

Con el objeto de impulsar Canarias como plataforma logística tricontinental y la mejora de su conectividad tanto interior como exterior se ajustarán las tarifas de pasajeros en los aeropuertos canarios así como se mantendrán y ampliarán la bonificación de tasas para el incremento de pasajeros con Canarias

Medida 8. Imputación de costes de CO2 al transporte aéreo y marítimo con Canarias

Las comisiones bilaterales entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Canarias analizarán los posibles impactos a partir de 2012, y su repercusión sobre la competitividad de las Islas Canarias, de la aplicación de la legislación comunitaria y nacional relativa a los instrumentos de mercado que imputen costes de CO2 al transporte aéreo y marítimo.

Medida 9. Creación de un Registro de Compañías Aéreas y Aeronaves.

Los resultados positivos para Canarias derivados de la existencia en el marco del REF de un Registro de Buques y Empresas Navieras con su propio régimen incentivador, aconsejan extender, con pleno respeto al marco comunitario, la medida a las Compañías Aéreas y Aeronaves, creando un Registro Especial para ellas inspirado en aquel y adaptado a sus especialidades.

Medida 10. Concesión de la 5ª libertad del aire para las aeronaves que procedan o se dirijan a África y/o América y aterricen en Canarias.

Con el objetivo de hacer un uso eficiente de las 5as libertades se analizarán de manera individualizada las solicitudes y proyectos operativos de las compañías aéreas de terceros países para operar las 3 libertades desde hacia Canarias, pudiendo otorgar este tipo de concesiones cuando se confirme que las propuestas presentadas son viables y contribuyen al establecimiento de operaciones y enlaces beneficiosos para España y las Islas Canarias.

Hasta que eso se produzca, se insta al Gobierno de España a realizar un conjunto de medidas urgentes que incentiven la actividad económica y la generación de empleo con la finalidad de alcanzar el objetivo de inversión estatal en Canarias análoga a la media estatal, conforme a las previsiones de los arts. 95 y 96 de la Ley de aspectos fiscales del REF de 1991 y las medidas propuestas por unanimidad del Parlamento de Canarias en sesión de 15 de marzo de 2011, integradas para hacer efectivos:

- El principio de continuidad territorial enunciado en la Ley 19/1994, de 6 de julio.
- La política energética coordinada con los objetivos comunitarios de lucha contra el cambio climático.
- La incentivación empresarial y diversificación de la economía canaria.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 3

Nuevas frecuencias de FM

El sector audiovisual es fundamental en una sociedad democráticamente avanzada. En los últimos años la comunicación audiovisual se ha basado en la explotación tradicional de la radio y televisión analógica condicionada por la escasez de espectro radioeléctrico y, por tanto, por una oferta pública y privada reducida que se vio fuertemente condicionada por afectar al Derecho fundamental a la información y por el principio de libertad de empresa, lo que exigió que la Ley 7/2010 liberalizara y modernizara el sector, así como que garantizara el pluralismo y la libre competencia en el mercado radiofónico y televisivo dada la importancia que tienen estos medios en la formación de la opinión pública la

En el caso de la radiodifusión analógica, la liberalización total no es posible por la escasez del espectro, por lo que es el Ministerio de Industria el que realiza el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias que establece la distribución del espacio radioeléctrico.

En Canarias, la radio es un sector de mucha relevancia social, que se acaba de ordenar pues solo existen 44 licencias concedidas, que se unen a las 156 que se concederán tras la inminente resolución del concurso.

Sin embargo, ese cuadro es manifiestamente insuficiente pues en la actualidad las empresas radiofónicas emiten en Canarias a través de más de 500 frecuencias, el doble de las previstas en la planificación estatal del año 2006, dado que se asignan en total únicamente 200 frecuencias en un territorio insular con una orografía que permitiría muchas más.



A esa insuficiencia de frecuencias para licencias comerciales se une la gran importancia que tienen en Canarias emisoras de carácter cultural y educativo, como Radio Ecce, con un amplio reconocimiento social e institucional, incluso con proyección internacional, que requieren de una amplia cobertura para cumplir con su función social, así como la radio pública, que requiere también de nuevas frecuencias para tener cobertura en todo el territorio archipelágico.

Todo ello hace necesaria una amplia reforma del sector de la radiodifusión en Canarias, mediante distintas fórmulas (traspaso de competencias a las CCAA, impulso de la tecnología digital, ampliación del número de frecuencias, implantación del dial único con amplia cobertura), dirigida a dar cabida al mayor número de empresas radiofónicas.

Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que de manera inmediata acuerde con el Gobierno de Canarias las medidas necesarias para que antes del 31 de diciembre de 2011 se pueda aumentar significativamente el número de frecuencias y el ámbito de cobertura de la radiodifusión sonora para ser utilizadas por empresas radiofónicas, sean de carácter económico, comunitarias sin ánimo de lucro o públicas.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N° 4

Controles sobre las mercancías de productos de la pesca en los puertos canarios

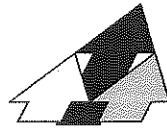
La estratégica situación de los puertos canarios en el Atlántico centro oriental, en la ruta de los continentes europeo, africano y americano, y cerca de los caladeros de pesca de África Occidental, hacen que muchas flotas de terceros países utilicen sus instalaciones como centro de sus operaciones, con la consiguiente llegada de un elevado volumen de mercancías y productos de la pesca.

La normativa comunitaria sobre pesca ilegal, aplicable desde el 1 de enero de 2010, establece una serie de obligaciones para la introducción en territorio de la UE de los productos de la pesca originarios de terceros países.

Debido a la diversidad de las flotas y caladeros que utilizan el Puerto de Las Palmas como enclave de sus operaciones, la Comisión Europea y España están realizando un control "en profundidad" sobre las mercancías de productos de la pesca que se descargan e importan.

España está aplicando con "todo rigor" las obligaciones comunitarias sobre lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada para aportar "transparencia y fiabilidad" sobre el conjunto de las importaciones que se introducen en el mercado único europeo.

Sin embargo, ese rigor está produciendo unas disfunciones importantes en la descarga de la carga que puede poner en peligro la continuidad de determinadas flotas en los puertos canarios. En efecto, el movimiento de pescado congelado ha caído un 74% en el puerto de La Luz, consecuencia de la paulatina huida de los barcos chinos, japoneses y coreanos por el "desmedido" control de la carga cuando llega a la ciudad,



Coalición Canaria

que hace que los empresarios tengan que esperar más de un mes hasta que reciben todos los permisos para poder retirar el pescado.

Esas disfunciones han provocado la necesidad de reforzar la coordinación entre la administración y los sectores afectados, para mejorar el conocimiento de las obligaciones derivadas de los nuevos reglamentos comunitarios sobre la tramitación de la documentación necesaria para evitar las importaciones de pescado ilegal.

Pese a la creación desde hace semanas de una mesa de trabajo para aunar posturas y tratar de poner remedio a esa situación, que amenaza con arruinar una actividad que genera cerca de 800 empleos directos en sectores muy diversos, además de una gran actividad para muchas empresas de sectores dispares, lo cierto es que el problema persiste y dista mucho de normalizarse.

Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a agilizar los trámites burocráticos al mínimo indispensable que evite la paralización de la carga de pesca en el Puerto de La Luz y de Las Palmas.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

**PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN Nº**

13

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y ss del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución para recuperar la estabilidad presupuestaria.**

Madrid, 29 de junio de 2011

Fdo.: Soraya SAÉNZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
PORTAVOZ

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO

La hacienda pública española atraviesa la mayor crisis de su historia reciente, consecuencia de una mala política económica. El mantenimiento de unos presupuestos fuertemente expansivos ante el desplome de los ingresos por la fuerte caída de la actividad económica, colocó el déficit conjunto de las Administraciones Públicas en un 11,13% en 2009 y un 9,24% en 2010.

Estos déficits acumulados han provocado que, en lo que va de legislatura, la deuda pública se haya incrementado en 25 puntos de PIB, desde 385.636 millones de euros -el 35,8% del PIB- en 2008, hasta 638.767 -el 60,1%- en 2010.

La dinámica alarmante de la deuda ha disparado la prima de riesgo española, situándose en máximos desde la entrada en el euro, llegando a superar en algunos momentos los 300 puntos básicos.

La Comisión Europea cuestiona que España pueda cumplir en 2011 el objetivo de déficit del 6% y prevé que alcance el 6,3%; a la vez que sitúa la deuda pública en el 68,1% del PIB en 2011 y en el 71% en 2012, más del doble que el nivel al que estaba en 2008.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente **Propuesta de Resolución**:

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la reforma de las Leyes de Estabilidad Presupuestaria, a fin de garantizar, en 2013, el objetivo del 3% de déficit y, a medio plazo, el equilibrio y la sostenibilidad de las cuentas públicas, de manera que se asegure la viabilidad de los servicios públicos y la eficiencia en el gasto. Dicha reforma incorporará los siguientes aspectos:

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

- a. Recuperar los conceptos de estabilidad presupuestaria y de techo de gasto, tal y como se definieron en la redacción original de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, es decir, aquella situación de equilibrio o superávit contabilizada año a año, y un techo de gasto que comprende todos los gastos del Estado.
- b. Establecer techos de gasto y de endeudamiento para todas las Administraciones Públicas, que garanticen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
- c. Reforzar los límites y el control del endeudamiento de todas las Administraciones Públicas.
- d. Incrementar la transparencia de las cuentas públicas incorporando escenarios plurianuales y las garantías y riesgo asumidas fuera del balance.”

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

**PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN Nº**

14

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y ss del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución para garantizar unas Administraciones Públicas austeras y eficientes.**

Madrid, 29 de junio de 2011


Fdo.: Soraya SAÉNZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
PORTAVOZ

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

EN EL CONGRESO

La superposición y solapamiento de ámbitos administrativos, junto con el excesivo desarrollo de los aparatos burocráticos, supone un importante lastre para nuestras Administraciones Públicas, en términos económicos, de competitividad y también, por qué no decirlo, de seguridad jurídica.

La finalidad de esta Propuesta de Resolución va dirigida a paliar los defectos advertidos y sus objetivos se resumen en dos: más austeridad y menos burocracia, lo que se traduce en la fijación de compromisos rigurosos de austeridad en el gasto público para todas las Administraciones Públicas, la racionalización de sus estructuras y reducción de costes, de un lado, y de otro, en la mejora de la eficiencia, mediante la simplificación de normativas y procedimientos, agilización de trámites, reducción de plazos y eliminación de trabas.

Para lograrlo, el Gobierno dispone de los instrumentos precisos para abordar todos y cada uno de estos objetivos mediante el ejercicio de sus propias competencias y liderar los cambios que afectan al resto de las Administraciones Públicas mediante acuerdos en los ámbitos de cooperación que correspondan.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente **Propuesta de Resolución:**

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha una Estrategia de Austeridad y de Reforma de las Administraciones Públicas que contemple, al menos, las siguientes actuaciones y programas:

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO

1. *Programa de Racionalización de Estructuras Administrativas y Costes, que incluya:*
 - a) *La reducción, al menos, de un 25% del número de altos cargos y un 50% del personal eventual al servicio de la Administración General del Estado.*
 - b) *Una reducción de costes de funcionamiento de la administración a través de:*
 - *La reducción de los gastos corrientes de la Administración General del Estado en un 10%.*
 - *Una política integral de gestión del patrimonio inmobiliario y de los alquileres de todas las Administraciones Públicas.*
 - *El fomento de centrales de compras, incluso entre Administraciones Públicas de diferente ámbito, para conseguir mejores precios de suministro.*
 - *La reducción del número de coches oficiales.*
 - *La racionalización del uso de teléfonos móviles.*
 - c) *La reestructuración de Organismos Autónomos, Agencias y otras entidades públicas a fin de conseguir su simplificación, menor coste y mayor transparencia.*
2. *Programa de Eficiencia de las Administraciones al Servicio del Ciudadano de forma que se logre una reducción real en términos de costes, trámites y plazos. Dicho programa contemplará:*
 - a) *Un Plan de Simplificación Normativa para sistematizar, unificar y reducir normativas, para lograr más transparencia y calidad normativa.*

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO

- b) *Un Plan de Simplificación de Procedimientos Administrativos, que plantee objetivos de calidad y eficiencia e incorpore auditorías sobre los mismos con objeto de avanzar hacia procedimientos más generales y menos fragmentados.*
- c) *Un Plan de Eliminación de Trámites y Reducción de Plazos para racionalizar el funcionamiento de las Administraciones, evitando al ciudadano costes innecesarios en tiempo y dinero”.*

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

**PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN Nº**

15

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y ss del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución para garantizar la financiación de los servicios públicos esenciales.**

Madrid, 29 de junio de 2011

Fdo.: Soraya SAÉNZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
PORTAVOZ

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO

La última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha constatado la incapacidad del Gobierno para garantizar la capacidad financiera de las administraciones territoriales y la difícil aplicación, tras un año de vigencia, del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas que propuso el Gobierno Socialista.

La mayoría de las Comunidades Autónomas han denunciado que, mientras el Ejecutivo les exige cumplir sus compromisos en materia de estabilidad presupuestaria, el propio Gobierno de la Nación incumple los acuerdos asumidos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio de 2009, en relación a la liquidación de los nuevos fondos del modelo.

Igualmente, las Entidades Locales vienen demandando al Estado la actualización del sistema de financiación local, compromiso que el Gobierno ha incumplido, y que está poniendo en riesgo la financiación de servicios públicos básicos imprescindibles para los ciudadanos, en especial en época de crisis. Especialmente llamativa es la derogación de la línea ICO – Morosidad para hacer frente al pago de proveedores.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente **Propuesta de Resolución:**

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Cumplir en su integridad el marco legal vigente de financiación autonómica, incluidos los recursos adicionales previstos en la ley 22/ 2009, de financiación autonómica, respetando los términos del Acuerdo 6/2009, de 15 de julio, del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO

2. Recuperar de forma urgente la línea de crédito ICO contenida en la redacción original de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Dicha línea se ofrecerá en condiciones preferentes a las Entidades Locales para facilitar el pago de deudas firmes e impagadas a empresas y autónomos.
3. Presentar a la mayor brevedad posible un nuevo Proyecto de Ley Básica del Gobierno y Administración Local, que defina el marco institucional y competencial de las entidades locales y de financiación local, que responda a los principios de autonomía y suficiencia.
4. Adoptar medidas extraordinarias y transitorias que permitan paliar las graves dificultades económico-financieras por las que están atravesando las entidades locales, sometidos a una fuerte condicionalidad presupuestaria."

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

**PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN Nº**

16

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y ss del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución para impulsar la reforma del Sistema Financiero**.

Madrid, 29 de junio de 2011

Fdo.: Soraya SAÉNZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
PORTAVOZ

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO

El Gobierno ha pasado de decir que España *"tiene el sistema financiero más sólido del mundo, ejemplo de solvencia"* a admitir casi tres años después que *"la reforma del sistema financiero es clave para disipar las dudas sobre la solvencia de la economía española"*.

Sin embargo, después de seis Reales-Decretos Ley y, a pesar de haber contado con el apoyo del Partido Popular en los cinco primeros, la realidad es que la reestructuración del sistema financiero sigue sin completarse. El resultado es que el crédito solo fluye a las Administraciones Públicas y la obtención de financiación sigue siendo imposible para empresas y familias.

El propio Banco Central Europeo alertó de que las medidas de la última reforma del sistema financiero, el Real Decreto Ley 2/2011, de 18 de febrero, de reforzamiento del sistema financiero, podía provocar una restricción del crédito, como así ha sido.

En definitiva, el Gobierno no ha sabido despejar las dudas existentes sobre nuestro sistema financiero. Más bien al contrario, las sucesivas reformas han provocado mayor desconcierto y tampoco han planteado el saneamiento de las entidades, ya que únicamente han puesto el énfasis en su capitalización.

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas ha dejado claro en su informe de fiscalización que, a pesar de la importancia de la supervisión, no están regulados aspectos claves de la misma.

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

EN EL CONGRESO

Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente **Propuesta de Resolución**:

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas para impulsar la reforma del sistema financiero:

1. Apostar por la transparencia, la igualdad, el saneamiento y la capitalización en el proceso de restructuración.
2. Acelerar la reforma del sistema financiero mediante la vinculación de las ayudas del FROB al saneamiento del balance de las entidades, sacando al mercado el stock de vivienda acumulado.
3. Establecer medidas que hagan que los balances empresariales y bancarios reflejen fielmente el valor de los activos. En concreto, aumentar las provisiones de la cartera de inmuebles de las entidades financieras y establecer un plazo, lo más breve posible, desde su adquisición para hacer obligatoria la provisión.
4. Establecer en el Banco de España un procedimiento de inspección que clarifique la actividad inspectora de las entidades de crédito y, en concreto, las condiciones que deben cumplir los inspectores y los efectos jurídicos de sus actas.”

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

**PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN N°**

17

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y ss del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución sobre medidas de apoyo a los emprendedores, PYMES y Autónomos.**

Madrid, 29 de junio de 2011

Fdo.: Soraya SAÉNZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
PORTAVOZ

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO

Las Pequeñas y Medianas Empresas (en adelante, PYMES) y los trabajadores autónomos representan más del 95% de las empresas españolas y son la fuente fundamental de creación de empleo de nuestra economía.

La empresa es una institución fundamental para que nuestra economía avance, se desarrolle, genere riqueza y cree empleo, lo que se traduce en mayor bienestar para la sociedad en general. Es, por ello, imprescindible que desde las Administraciones Públicas se potencie y facilite la iniciativa empresarial, en la búsqueda de una mayor competitividad, un mayor dinamismo económico y, en definitiva, de un mayor bienestar social.

Los efectos devastadores que la crisis ha tenido sobre los emprendedores, y en particular, la falta de crédito, la elevada morosidad y el desplome del consumo, han provocado la desaparición de una parte importante de nuestro tejido empresarial. Por ello es más necesario que nunca que la Administración centre sus esfuerzos en estos colectivos, PYMES y autónomos, más vulnerables a la caída brusca de la actividad económica.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente **Propuesta de Resolución:**

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Apoyar la creación de empresas, incorporando mayores niveles de simplificación administrativa que reduzcan los plazos necesarios para la misma, y facilitando su puesta en marcha y desarrollo mediante asesoramiento, viveros, redes empresariales, etc. en coordinación con las Comunidades Autónomas.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

2. Establecer incentivos a la inversión en proyectos empresariales y la creación de empleo:
- a) Aplicar un tipo impositivo del 20% en el Impuesto sobre Sociedades a las empresas con cifra de negocios inferior a cinco millones de euros, de forma permanente, eliminando las limitaciones de plantilla, de creación de empleo y de base imponible existentes en la actualidad.
 - b) Crear una nueva deducción en la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades por importe de 3.000 euros por la contratación del primer trabajador de una empresa de nueva creación que no tenga la condición de socio de la entidad. El disfrute de esta deducción requerirá que el trabajador sea contratado por tiempo indefinido y su permanencia en la empresa sea, como mínimo, de dos años.
 - c) Establecer incentivos fiscales adicionales a la I+D+i a través del incremento del porcentaje de deducción en el Impuesto sobre Sociedades desde el 12% actual hasta el 20% para las actividades de innovación.
 - d) Crear una nueva deducción en el IRPF por importe del 20% de los gastos efectuados en concepto de formación para los profesionales autónomos.
 - e) Cambiar el criterio de ingreso del IVA en la Hacienda Pública, atendiendo al momento de cobro de la factura y no el de su emisión.
 - f) Fomentar la actividad de los "Business Angels" y el apoyo a las nuevas iniciativas empresariales, creando una deducción en el IRPF del 10% de las cantidades desembolsadas por personas físicas en concepto de participación en capital de empresas de reducida dimensión, que sería reembolsable en función de la rentabilidad del proyecto.

CRA. DE SAN JERÓNIMO, 40 – 2º - 28071 – MADRID

TELF. 91 390 60 00 – EXTS. 6667, 6668, 6697,6679 – FAX: 91 390 58 84

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO

- g) Establecer una bonificación del 100% en las cotizaciones a la Seguridad Social durante el primer año a la contratación de menores de 30 años, mujeres y parados de larga duración mayores de 45 años."

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

**PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN Nº**

18

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y ss del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución para desarrollar una Estrategia para la creación de empleo, con especial atención a los jóvenes.**

Madrid, 29 de junio de 2011

Fdo.: Soraya SAÉNZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
PORTAVOZ

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO

En España hay 4.910.200 personas en desempleo (Datos: EPA I Trimestre 2011). Desde que se inició la crisis el desempleo no ha dejado de crecer en nuestro país. En la presente legislatura, hemos pasado de una tasa de paro del 9,6% en el primer trimestre de 2008 al 21,2% en el primer trimestre de 2011. Tenemos la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea, duplicando su media, que se situó en el 9,4% en el mes de abril, según datos de Eurostat. Mientras que en Europa el desempleo se reduce, en España no deja de crecer.

Han pasado nueve meses desde que el Gobierno aprobó la reforma laboral, y los resultados no han sido positivos. La Ley 35/2010 de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo no ha conseguido crear empleo. Se han destruido 325.000 puestos de trabajo. Ni la reforma laboral ni la reforma de la negociación colectiva, recientemente aprobada, han introducido las medidas que necesita nuestro mercado laboral para crear empleo.

Por otro lado, la tasa de paro juvenil en nuestro país se ha disparado. Uno de cada dos jóvenes menores de 25 años no consigue encontrar un empleo. En los últimos siete años, hemos pasado de una tasa de paro juvenil del 22,8% al 44,6% (Datos Eurostat, abril 2011). Mientras que en Europa, la media de desempleo juvenil ha descendido en el último año, pasando del 21,2% (en abril de 2010) al 20,3% (en abril de 2011), en España ha aumentado casi cuatro puntos, pasando del 40,9% al 44,6%.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente **Propuesta de Resolución**:

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar una Estrategia para la creación de empleo donde se incluyan los siguientes aspectos:

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D. C. 20535

- CRA. DE SAN JERÓNIMO, 40 – 2º - 28071 – MADRID**

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

EN EL CONGRESO

- Establecer una bonificación del 100% a las cotizaciones de la Seguridad Social durante el primer año a la contratación de menores de 30 años.
- Crear el "cheque formación" para jóvenes menores de 30 años que se encuentren tanto en situación laboral activa como en situación de desempleo.
- Incrementar la oferta pública de programas de formación para el empleo y las titulaciones de Formación Profesional de grado medio y superior del sistema educativo.
- Modificar la normativa estatal para optimizar el sistema de financiación actual de Formación Profesional, posibilitando que los centros de Formación Profesional del sistema educativo y de la formación para el empleo puedan realizar una oferta integrada.
- Posibilitar que la actual red de centros de Formación Profesional sostenida con fondos públicos pueda impartir en jornada de tarde/noche formación reglada y para el empleo.
- Establecer un Plan Extraordinario de Formación Profesional que pueda dar cabida a 800.000 jóvenes mediante medidas de orientación, formación profesional e inserción laboral."

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

**PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN Nº**

19

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de política general en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución para poner en marcha una Estrategia Nacional de Competitividad.**

Madrid, 29 de junio de 2011

Fdo.: Soraya SAÉNZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
PORTAVOZ

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO

El futuro y el éxito de la economía española en una Unión Monetaria depende de forma prioritaria, por un lado, del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y, por otro, de dotar a la economía española del grado de flexibilidad y competitividad necesarios para que los precios de los productos y servicios españoles resulten atractivos.

Durante los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero se ha deteriorado enormemente la competitividad de nuestra economía. En este momento España ocupa el puesto 42 del ranking mundial de competitividad del *World Economic Forum*. Ha descendido 13 puestos en los dos últimos años y 19 puntos desde 2004. El deterioro ha llegado hasta tal punto que las principales incertidumbres que pesan sobre la economía española tienen su origen en las dudas sobre la capacidad para recuperar la competitividad perdida.

Dada esta situación urge diseñar una Estrategia Nacional de Competitividad que aborde los principales afectos que afectan a los costes de nuestras empresas y su capacidad para aprovechar las oportunidades de mercado.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, formula la siguiente **Propuesta de Resolución**:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar una Estrategia Nacional de Competitividad que fije objetivos y actuaciones y elabore informes de competitividad de carácter trimestral para su seguimiento en el seno de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Dicha estrategia deberá contemplar, entre otras, los siguientes ámbitos de actuación prioritarios:

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO

Unidad de mercado:

- Establecer, en cooperación con las Comunidades Autónomas, una normativa que garantice la unidad de mercado, de forma que se asegure la libre circulación de bienes y servicios en todo el territorio nacional.

Organismos reguladores:

- Garantizar la independencia y la transparencia de los organismos reguladores y, a tal efecto, proponer un nuevo sistema de nombramiento de sus miembros por el Congreso de los Diputados.

Internacionalización de las empresas españolas:

- Revisar en profundidad todos los instrumentos de promoción comercial de que dispone el Estado, mediante un análisis coste-beneficio y coste-eficacia, de forma que se priorice la utilización de los recursos disponibles al servicio de la proyección internacional de las empresas españolas. En especial, deben ser objeto de particular atención las pequeñas y medianas empresas, los sectores más innovadores y los mercados emergentes.
- Diseñar un Plan General de Marca España para promocionar la imagen de nuestro país y de sus empresas en el exterior, como factor estratégico de competitividad.
- Recuperar los incentivos fiscales a la internacionalización de la empresa española.
- Crear un seguro de apoyo jurídico para las PYMES españolas en su proceso de internacionalización.

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO

I+D+i:

- Mejorar las deducciones previstas en el Impuesto sobre Sociedades por actividades de Investigación y Desarrollo e Innovación Tecnológica y para el fomento de las Tecnologías de la Información:
 - Elevar el porcentaje de deducción por actividades de innovación al 20%.
 - Suprimir el límite de la deducción en la cuota, de manera que la deducción pueda absorber la totalidad de la misma.
 - Supresión de los coeficientes de reducción aplicables a la deducción por actividades de I+D+i.
- Utilizar como criterio general en las convocatorias de ayudas la concurrencia competitiva y sólo de forma excepcional las subvenciones nominativas.

Energía:

- Establecer una política energética basada en un mix equilibrado para reducir la dependencia del exterior y las emisiones de CO₂, garantizar el suministro, la competencia, la eficiencia energética y la sostenibilidad medioambiental.
- Evitar que, en plena crisis económica, los incrementos de las tarifas energéticas reguladas erosionen aún más el poder adquisitivo de las familias e incrementen los costes de producción de las empresas, en particular, de las PYMES.

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO

- Fomentar la implantación de medidas de ahorro y eficiencia energética para todos los sectores, en particular las Administraciones Públicas, creando programas específicos de ayuda y de financiación público-privada que permitan acometer las inversiones correspondientes.

Turismo:

- Presentar un Plan de Turismo Integral que asegure la coordinación y el desarrollo de políticas transversales por todos los ministerios implicados en el sector.
- Aplicar un tipo superreducido del IVA del 4% a los servicios de hostelería, acampamiento y balneario, los de restaurantes y, en general, el suministro de comidas y bebidas para consumir en el acto, así como al transporte de personas y de sus equipajes.

Infraestructuras de transporte:

- Reorientar la capacidad de gasto en inversión del Estado con criterios preferentes de rentabilidad social y económica, desterrando las prácticas arbitrarias de selección de proyectos.
- Promover el transporte de mercancías por ferrocarril a través de la liberalización definitiva, permitiendo la entrada de otros operadores a los ya existentes, así como invertir en la remodelación de la red convencional para su progresiva dedicación al transporte de mercancías.
- Impulsar definitivamente un plan de colaboración público-privada que permita financiar, adjudicar y comenzar obras de infraestructuras de interés general."

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

**PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN N°**

20

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de política general en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución en defensa del campo español**.

Madrid, 29 de junio de 2011

Fdo.: Soraya SAÉNZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
PORTAVOZ

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO

El campo español se encuentra en una situación crítica. La renta agraria es un 15% inferior que en el año 2004, y las perspectivas de agricultores y ganaderos son preocupantes.

El Gobierno no ha sido capaz de reequilibrar la cadena agroalimentaria, siendo los agricultores y ganaderos los más perjudicados. Tampoco ha sido capaz de ayudar al sector en el control de los costes de producción (las tarifas eléctricas han subido entre un 70-100%). El Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sólo aprobó un plan de choque para el campo tras la mayor manifestación del sector en noviembre de 2009; un plan que, sin embargo, ha incumplido.

El sector hortofrutícola español está sufriendo una grave crisis por la infundada e injustificada acusación de la Consejera de Sanidad de Hamburgo, sobre los orígenes de la bacteria E.Coli, así como el incumplimiento del protocolo de actuación de las Alertas Sanitarias por parte de la Unión Europea.

El Gobierno se ha mostrado débil en la defensa de los intereses españoles ante nuestros socios de la Unión Europea, tanto en la "crisis del pepino", como en la reforma de la Política Agraria Común.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, formula la siguiente **Propuesta de Resolución**:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. *Exigir el cumplimiento del Plan de choque de ayudas al sector agrario comprometido con las cooperativas y las organizaciones profesionales agrarias.*

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO

2. *Desarrollar las actuaciones necesarias para conseguir la equiparación del IVA de compensación del sector agrícola con el del sector ganadero*
3. *Adecuar las tarifas de riego a la realidad del sector y aplicar el IVA reducido.*
4. *Desarrollar las medidas comprendidas en la Moción consecuencia de Interpelación Urgente al Gobierno para mejorar la seguridad rural en el campo, aprobada por el Congreso de los Diputados el 28 de diciembre de 2010.*
5. *Cumplir las mociones propuestas por el Partido Popular el 19 de mayo y 26 de noviembre del 2009 que comprenden ayudas financieras, comerciales y fiscales para el sector agrario.*
6. *Impulsar un plan de modernización de explotaciones agrarias y de ayudas a la incorporación de la titularidad de las explotaciones agrarias a los jóvenes ante la falta de relevo generacional.*
7. *Reforzar el apoyo a las explotaciones de regadíos para mantener una producción competitiva.*
8. *Emprender todas las acciones necesarias tendentes a mejorar el funcionamiento y el equilibrio de la cadena alimentaria.*
9. *Fomentar el desarrollo de contratos de homologación en el sector agrario para mejorar el equilibrio de la oferta y la demanda.*
10. *Instar ante la Comisión Europea la aplicación del principio de reciprocidad en todos los tratados comerciales que suscriba la Unión Europea con terceros países.*

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

11. *Cumplir, de forma inmediata y urgente, la iniciativa parlamentaria aprobada por unanimidad el pasado martes, 21 de junio, en el Congreso de los Diputados, para que la Comisión Europea compense la totalidad de los daños producidos, se amplíe a la totalidad de la producción afectada las compensaciones, se distribuyan las ayudas por sobres nacionales y se cofinancien con fondos comunitarios campañas para restablecer la confianza del consumidor."*

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

**PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN Nº**

21

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución para mejorar la calidad del sistema educativo español.**

Madrid, 29 de junio de 2011

Fdo.: Soraya SAÉNZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
PORTAVOZ

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO

El índice de fracaso (26%) y abandono escolar (28,4%) del sistema educativo español dobla la media de la Unión Europea (14,4%), y se sitúa a la cola de los países de la UE. El nivel de conocimientos de los alumnos españoles ha empeorado en los últimos 10 años. En lectura España está a 12 puntos de la media de la OCDE y cuenta con un bajo índice de alumnos en los niveles de excelencia (3%), en relación con la media de los países de la OCDE (8%), según el Informe PISA 2009. La Ley Orgánica de Educación (LOE) no está dando resultado. Para reducir el índice de abandono escolar hasta un 10%, establecido como objetivo por la UE 2020, se hace necesario reformar en profundidad el modelo educativo vigente.

También urge revisar el sistema de acceso y formación del profesorado, que son el motor de una enseñanza de calidad. Es necesario atraer a los mejores profesores y maestros, dotarles de formación inicial y permanente, así como de reconocimiento social y económico.

Finalmente, ninguna universidad española figura entre las 100 universidades mejores del mundo, según diferentes rankings internacionales. El abandono universitario alcanza el 30%. Se ha retrasado la implantación de un nuevo modelo de financiación hasta 2013 y la actual estructura de las enseñanzas universitarias no promueve la movilidad.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, formula la siguiente Propuesta de Resolución:

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar una Estrategia Nacional de Calidad de la Educación que procure una revisión profunda del modelo educativo vigente.

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO

Esta Estrategia incluirá los siguientes objetivos y medidas:

- Establecer a nivel nacional evaluaciones generales de carácter objetivo en las distintas etapas, que favorezcan una misma calidad educativa en todas las comunidades.
- Promover un bachillerato de tres años con el objetivo mejorar la preparación de los futuros universitarios y elevar el nivel cultural medio de España.
- Garantizar las libertades educativas en relación con la elección de la lengua y del centro educativo.
- Impulsar una mayor autonomía de los centros escolares basada en la transparencia y en la rendición de cuentas.
- Establecer un nuevo modelo de becas que se ajuste a la nueva realidad económica de las familias en época de crisis y que incluya una modalidad que premie el esfuerzo y el mérito.
- Impulsar de forma decisiva un mayor grado de implicación de los padres en la educación de sus hijos y en la participación y colaboración con los centros educativos.

En relación con el profesorado, se adoptarán las siguientes medidas:

- Aprobar un nuevo sistema nacional de acceso a la función docente que permita atraer a la docencia a los mejores profesionales, primando el mérito y la capacidad.
- Reconocer por ley la autoridad del profesorado y garantizar su reconocimiento social y económico.

CRA. DE SAN JERÓNIMO, 40 – 2º - 28071 – MADRID

TELF. 91 390 60 00 – EXTS. 6667, 6668, 6697,6679 – FAX: 91 390 58 84

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

EN EL CONGRESO

- Adoptar las medidas necesarias para la profesionalización de la función directiva. Fortalecer la dirección escolar y su liderazgo.
- Aprobar el Estatuto Básico de la Función Pública Docente con el mantenimiento de los cuerpos nacionales de profesorado en toda España.

En educación universitaria, se adoptarán las siguientes medidas:

- Impulsar una mayor conexión con el mundo empresarial adaptando los contenidos formativos a las necesidades de la sociedad, fomentando la empleabilidad de los graduados.
- Revisar el modelo de gobierno de las universidades con el objeto de ser más eficaces y competitivas en la búsqueda de la excelencia. Establecer objetivos evaluables, claros y definibles y un modelo de financiación transparente y vinculado a la obtención de resultados.
- Revisar la flexibilidad de los estudios de grado y postgrado para facilitar la movilidad internacional y su plena adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior.
- Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a las enseñanzas universitarias y unificar los criterios de las pruebas de acceso a la universidad.
- Implantar un nuevo modelo de becas adaptado a la estructura de las enseñanzas universitarias en el Espacio Europeo de Educación Superior, que tenga en cuenta la renta, la movilidad y el rendimiento de los estudiantes.
- Aprobar un Estatuto del Personal Docente e Investigador que se ajuste a los principios de mérito, capacidad y transparencia, basado en los resultados académicos y de transferencia tecnológica."

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

**PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN Nº**

22

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y ss del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución relativa a garantizar el Estado del Bienestar.**

Madrid, 29 de junio de 2011

Fdo.: Soraya SAÉNZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
PORTAVOZ

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO

La crisis económica ha generado una crisis social, con 5 millones de parados, 1.386.000 familias con todos sus miembros en paro y 514.000 hogares que no cuentan con ningún tipo de ingresos.

Frente a la necesidad de adoptar reformas estructurales en el ámbito económico, el Gobierno ha optado por llevar a cabo los mayores recortes sociales de la democracia.

Con este Gobierno se han reducido las prestaciones por hijo a cargo, se ha eliminado el cheque-bebé, se ha eliminado la deducción por la compra de vivienda habitual, se han congelado las pensiones, se ha reducido el presupuesto para las personas dependientes, se ha recortado el Fondo para la integración de inmigrantes y se ha pegado un tijeretazo del 80% al Plan de Discapacidad.

También se resiente la sanidad pública. El Sistema Nacional de Salud acumula un déficit cercano a los 15.000 millones de euros, que supone un riesgo tanto para su sostenibilidad como para la calidad y cohesión de las prestaciones.

Del mismo modo, se hace necesario atender a la situación de las familias con dificultades para asumir sus cartas hipotecarias, y adoptar medidas urgentes, a la espera de las conclusiones de la Subcomisión de Estudio de posibles cambios del sistema hipotecario creada a instancias del Grupo Parlamentario Popular y ERC.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente **Propuesta de Resolución**:

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar el Estado del Bienestar, adoptando las siguientes medidas:

CRA. DE SAN JERÓNIMO, 40 – 2º - 28071 – MADRID

TELF. 91 390 60 00 – EXTS. 6667, 6668, 6697,6679 – FAX: 91 390 58 84

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

EN EL CONGRESO

I. Familia e Inclusión Social:

- Aprobar un nuevo Plan de Inclusión Social para el periodo 2011-2013 que contenga objetivos reales y medidas eficaces para combatir la pobreza.
- Restablecer en la cuantía de 500 euros anuales las prestaciones por hijo a cargo para menores de tres años.

II. Dependencia

- Garantizar la financiación del 50% del gasto realizado, en función de la prestación o servicio, por parte de la Administración General del Estado.
- Simplificar el proceso de acceso a las prestaciones y servicios de atención a las personas dependientes.
- Regular la cobertura privada a la dependencia y su tratamiento fiscal tal y como se establece en la D.A. 7ª de la Ley de Dependencia.
- Presentar en el plazo de tres meses un proyecto normativo para la regulación del espacio socio-sanitario.
- Establecer un plan de atención para menores de tres años dependientes.

III. Sostenibilidad de la Sanidad

- Consensuar un Pacto por la Sanidad, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Salud, encontrar soluciones a la deuda acumulada por el mismo, garantizar la universalidad y equidad en las prestaciones y modernizar la gestión sanitaria con el objeto de mejorar su eficiencia y conseguir una atención óptima con un mayor ahorro de costes.

IV. Vivienda y Sistema Hipotecario

- Restablecer la deducción por adquisición de vivienda habitual en el IRPF.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

- Aprobar los instrumentos económicos y financieros, así como los incentivos fiscales necesarios, que permitan la incorporación del actual stock de vivienda nueva sin vender al mercado de alquiler.
- Analizar y supervisar las condiciones para la concesión de créditos hipotecarios, con el fin de evitar cláusulas abusivas, con especial atención a las llamadas "cláusulas suelo".
- Establecer, en colaboración con agentes sociales, económicos y financieros, el desarrollo de sistemas de información, mediación y resolución de conflictos que permitan a las familias españolas afrontar con mayor seguridad, conocimiento y garantías jurídicas sus operaciones de crédito, ya sea en el momento de constitución o a lo largo de la vida del préstamo hipotecario."

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

**PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN Nº**

23

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y ss del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución para diseñar una política exterior de consenso que implique al conjunto de la sociedad española.**

Madrid, 29 de junio de 2011

Fdo.: Soraya SAÉNZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
PORTAVOZ

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO

La política exterior es una política de Estado que debe construirse sobre la base del servicio a los intereses generales en todos sus ámbitos y a la defensa de nuestros ciudadanos, de sus derechos y libertades, así como de nuestra democracia. Una política exterior a la altura de los cambiantes desafíos del siglo XXI requiere un diseño político de consenso y pacto que ha de orientarse hacia la mayor estabilidad posible.

España es una potencia con intereses e influencia de vocación global debido a su situación geoestratégica y al hecho de compartir unos vínculos históricos trasatlánticos y un idioma común, que es la lengua materna de quinientos millones de personas en el mundo. Esta suma de factores hace que España deba reforzar su capacidad de interlocución global mediante una política exterior que sea un eficaz instrumento de defensa transversal de los intereses de España y de los españoles y una forma de proyectar su influencia en el mundo.

Para lograrlo, hay que diseñar una estrategia consensuada que convierta la política exterior en una herramienta útil para la recuperación de nuestra imagen de país y para la lucha contra la crisis.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente **Propuesta de Resolución:**

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Diseñar y ejecutar una política exterior sólida, responsable, consensuada, que defienda eficazmente los intereses de España y de los españoles, que impulse nuestra influencia política, económica y cultural en el mundo. Que promueva la democracia y la defensa de la paz y de los derechos humanos y renueve nuestro firme compromiso en la lucha contra el terrorismo y otras formas graves de criminalidad organizada.

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO

2. Reforzar la presencia e influencia de España en los organismos y organizaciones internacionales, poniendo el acento en la presencia permanente y de pleno derecho de España en los foros de mayor peso, así como fomentar la presencia de funcionarios españoles en el sistema de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.
3. Redoblar los esfuerzos en la defensa de los intereses políticos, económicos, financieros, inversores, comerciales, culturales, educativos y de seguridad de España en el mundo, tomando cuantas medidas sean precisas para reforzar nuestra presencia e influencia internacionales.
4. Intensificar los esfuerzos de todas las Administraciones Públicas y, muy especialmente, del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, así como de su Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), para la proyección y promoción de los intereses económicos y comerciales de España y de sus empresas, especialmente las pequeñas y medianas, que son las que más están sufriendo la crisis económica en estos años.
5. Acometer, de manera definitiva, la reforma de la acción exterior del Estado y de su Servicio Exterior, en su sentido más amplio, haciéndolo cada vez más profesional, al servicio de los intereses generales a las órdenes del gobierno, entendiendo el Servicio Exterior también como un servicio público de calidad, en todos sus ámbitos, desde el político al comercial, al consular o al cultural. Los principios que deberán regir el Servicio Exterior en todos sus ámbitos son los de mérito y capacidad, buscando potenciar al máximo su profesionalización.
6. Racionalizar y optimizar los recursos presentes y futuros a través de la contención y racionalidad presupuestaria, pero haciendo uso de las nuevas tecnologías para recortar gastos y ganar en eficiencia.

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO

7. Vincular la política de cooperación a la Política Exterior general de España, convirtiéndola en un pilar fundamental de la misma para que así comparta objetivos y prioridades básicas.
8. Proteger los intereses estratégicos y de seguridad de España en el ámbito internacional, en coordinación con nuestros socios y aliados en la OTAN y en la Unión Europea, contribuyendo a defender y consolidar la paz, la seguridad y la estabilidad mundiales, como reza la Carta de Naciones Unidas.
9. A redoblar los esfuerzos en materia de protección del medio ambiente, de la biodiversidad, y a hacer los esfuerzos necesarios para luchar contra los adversos efectos del cambio climático, así como apoyar la consecución de los Objetivos del Milenio, tal y como están recogidos por las Naciones Unidas, convirtiendo todo ello en prioridades de la política exterior de España.”

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

**PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN Nº**

24

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de política general en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución para mejorar la transparencia y el buen gobierno de las Administraciones Públicas.**

Madrid, 29 de junio de 2011

Fdo.: Soraya SAÉNZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
PORTAVOZ

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO

La transparencia de las Administraciones Públicas es uno de los aspectos claves del Buen Gobierno. La existencia de altos niveles de transparencia consolida a las sociedades democráticas, potencia las instancias de control y facilita la participación ciudadana en cuestiones de interés general. Asimismo favorece la equidad social y la eficiencia económica.

España es, junto a Chipre y Malta, uno de los pocos países europeos que carece de Ley de transparencia y acceso de los ciudadanos a la información pública. Asimismo, España tampoco ha firmado el Convenio Europeo sobre Acceso a los Documentos Públicos, adoptado por el Consejo de Ministros del Consejo de Europa, el 27 de noviembre de 2008 y abierto a la firma de los Estados miembros desde hace ya más de dos años.

Es urgente abordar una regulación legal al respecto que, de forma ambiciosa y bajo una perspectiva integral que involucre a todos los poderes públicos, aborde el desarrollo de los mecanismos institucionales que refuercen nuestro Estado Social y Democrático de Derecho a través de la transparencia con sus ciudadanos y que contribuya a mejorar la calidad de nuestra democracia y la eficiencia de sus instituciones.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la **siguiente Propuesta de Resolución:**

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- 1. Presentar en el plazo de un mes un Proyecto de Ley de transparencia, acceso de los ciudadanos a la información pública y Buen Gobierno.*
- 2. Firmar el Convenio Europeo sobre Acceso a los Documentos Públicos, adoptado por el Consejo de Ministros del Consejo de Europa, el 27 de noviembre de 2008, abierto a la firma desde el 18 de junio de 2009”*

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

**PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN N°**

25

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y ss del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución sobre la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes.**

Madrid, 29 de junio de 2011

Fdo.: Soraya SAÉNZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
PORTAVOZ

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO

La Conferencia de Presidentes tan solo se ha reunido desde su creación en cuatro ocasiones, tres en la anterior legislatura y una en la presente. A pesar de que el art. 4º de su Reglamento señala que debe reunirse al menos una vez al año.

El Partido Popular considera que la convocatoria de dicho órgano, en un marco de lealtad institucional, sería muy positivo para abordar cuestiones tan fundamentales como los problemas de sostenibilidad de las finanzas públicas, la necesidad imperiosa de abordar las políticas necesarias para lograr que nuestra economía vuelva a crecer y a crear empleo, la mejora de la calidad del sistema educativo o las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad de nuestro modelo de bienestar, asuntos todos ellos en los que están implicadas las administraciones autonómicas además del Gobierno de la Nación.

Además, el nuevo escenario político surgido de las últimas elecciones autonómicas hace no solo necesaria, sino urgente su convocatoria.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente Propuesta de Resolución:

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes, una vez constituidos los nuevos gobiernos autonómicos, como una verdadera Conferencia Política, para que se aborden entre otras, las siguientes cuestiones:

- a. Reformas económicas para la creación de empleo.
- b. Reformas educativas.
- c. Garantía de los servicios públicos.”

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

**PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN N°**

26

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y ss del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución** para **garantizar el respeto del Parlamento por parte del Gobierno**.

Madrid, 29 de junio de 2011

Fdo.: Soraya SAÉNZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
PORTAVOZ

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO

La Legislatura que estamos a punto de terminar será recordada por la incapacidad del Gobierno para solucionar la grave crisis económica y el desempleo; y en términos puramente parlamentarios como la Legislatura del veto. El Gobierno socialista ha tratado de silenciar el papel del Parlamento evitando el debate político a través del veto a aquellas propuestas que no le ha interesado someter a discusión, convirtiendo en habitual una facultad que debe ser "excepcional". Los gobiernos de José María Aznar no ejercieron nunca dicha facultad, los de Felipe González tan solo en 8 ocasiones, mientras que en estos últimos tres años, el ejecutivo socialista ha vetado, hasta en 80 ocasiones, iniciativas de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.

Al abuso del Gobierno en la utilización del veto, hay que sumar la resistencia de determinados ministros a atender las solicitudes de comparecencia de los Grupos -580 solicitudes de comparecencia pendientes de ser atendidas por los ministros en esta legislatura - o los reiterados incumplimientos del ejecutivo a los mandatos del Parlamento.

En el último Debate sobre el Estado de la Nación, aprobamos una Propuesta de Resolución del Grupo Popular en la que se exigía al Gobierno el cumplimiento efectivo de los mandatos de las Cámaras. Casi un año después, el Ejecutivo sigue sin atender esa obligación democrática.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente Propuesta de Resolución:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Abstenerse de hacer un uso indiscriminado de la facultad excepcional otorgada al Gobierno para vetar y negar la conformidad a la tramitación de iniciativas de los grupos parlamentarios.
2. Atender, en un plazo máximo de tres meses, las solicitudes de comparecencia de sus miembros formuladas por los grupos parlamentarios.

CRA. DE SAN JERÓNIMO, 40 - 2º - 28071 - MADRID

TELF. 91 390 60 00 - EXTS. 6667, 6668, 6697, 6679 - FAX: 91 390 58 84

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

3. Dar cumplimiento efectivo a la Propuesta de Resolución nº 30 aprobada en el anterior Debate sobre el Estado de la Nación y, con ella, al resto de los mandatos emanados de la voluntad mayoritaria de la Cámara, como condición imprescindible para garantizar la calidad de la democracia y la legitimidad del Gobierno. “

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

**PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN N°**

27

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución para la defensa de la democracia en las instituciones vascas y navarras.**

Madrid, 29 de junio de 2011

Fdo.: Soraya SAÉNZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
PORTAVOZ

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO

La Sentencia de 1 de mayo de 2011 de la Sala Especial del artículo 61 del Tribunal Supremo impedía la presencia de Bildu en las elecciones municipales al considerar probado que la coalición de Eusko Alkartasuna y Alternatiba "se ha erigido como un cauce simulado y fraudulento para soslayar la ilegalización judicial del brazo político de ETA y así permitir el acceso de Batasuna/ETA a las instituciones representativas".

Sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró nula esta sentencia alegando "la insuficiente entidad probatoria de los indicios manejados por el Tribunal Supremo" y estimó la demanda de amparo de la coalición Bildu, que pudo así concurrir a los comicios.

Todo ello se ha traducido en la irrupción de Bildu en las instituciones vascas y navarras, desde las que, en los últimos días, se vienen acumulando indicios que avalan la tesis de que los electos independientes de Bildu no son sino una continuación de la ilegalizada Batasuna. De ello son muestra el acoso a concejales del PP y el PNV, como en el caso de Elorrio, la retirada de símbolos constitucionales en los ayuntamientos, la prohibición de acceso a los escoltas en consistorios gobernados por Bildu, la presencia de destacados dirigentes de Batasuna en las tomas de posesión y en los equipos directivos de los gobiernos de Bildu o los discursos reivindicativos de las posiciones defendidas por ETA/Batasuna que se escuchan en boca de los nuevos electos de Bildu. Y muy especialmente, la negativa a condenar la violencia terrorista de ETA y pedir su disolución.

Ya el Tribunal Constitucional en su sentencia admitió la posibilidad de que "en el futuro la sospecha quede confirmada" y recordó a estos efectos que las últimas reformas legales introdujeron "una panoplia de instrumentos de control a posteriori".

A la vista de los últimos acontecimientos, sobran argumentos para recurrir a las previsiones a posteriori que la Ley establece. Porque, con la Ley en la mano, el

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

Gobierno dispone de instrumentos para que la presencia de Bildu en las instituciones no sea irreversible.

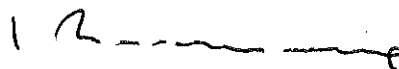
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente **Propuesta de Resolución:**

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, desde la lealtad al Pacto antiterrorista y en defensa de la dignidad de las instituciones vascas y navarras y de las libertades de los ciudadanos, extreme la vigilancia sobre la conducta y las manifestaciones de los representantes electos de Bildu a fin de evitar que utilicen las instituciones democráticas para continuar la estrategia marcada por Batasuna/ETA”.

A LA MESA DEL CONGRESO

DON JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) de acuerdo con lo establecido en el artículo 197 del Reglamento de la Cámara, presenta 15 PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN EN EL DEBATE DE POLÍTICA GENERAL CELEBRADO LOS DÍAS 28 Y 29 DE JUNIO DE 2011.

Palacio del Congreso de los Diputados, a 29 de junio de 2011.



Josep Antoni Duran i Lleida
Portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N° 1

EFFECTIVA DISPOSICIÓN DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD PARA CATALUNYA.

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar todos los trámites necesarios para que se haga efectiva en este ejercicio la transferencia a la Generalitat de Catalunya del anticipo correspondiente al Fondo de Competitividad de 2011, en forma de anticipo de tesorería, de acuerdo con la disposición transitoria segunda de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N° 2.

29

MÁS INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA PARA CATALUNYA

El Congreso de los Diputados considera necesario, y así lo ha manifestado reiteradamente esta Cámara, priorizar en los próximos años aquellas inversiones en infraestructuras que más contribuyan a la competitividad de la economía, minimizando los efectos de la austeridad presupuestaria en este tipo de inversiones. De esta forma, lamenta que el Gobierno siga tomando decisiones sin tener en cuenta esta prioridad, en cuanto tampoco ha presentado ningún estudio coste/beneficio de las inversiones, comprometiendo recursos en infraestructuras de dudosa rentabilidad social y económica al mismo tiempo que se paralizan obras con un amplio consenso en su priorización.

En este sentido, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

INVERSIONES DEL PLAN DE CERCANÍAS

1. Iniciar, de acuerdo con la Generalitat de Catalunya, aquellas obras incluidas en el Plan de Cercanías 2008-2015 que se consideran urgentes, de acuerdo con la moción sobre el bajo cumplimiento del plan de cercanías de Barcelona, aprobada por el Pleno, para continuar con la mejora del servicio ferroviario de cercanías.

CORREDOR DEL MEDITERRÁNEO

2. Acelerar la construcción del corredor ferroviario del Mediterráneo en ancho internacional para el transporte de mercancías, así como los accesos a los principales modos logísticos. Para ello, es necesario impulsar los tramos con un mayor retraso en la planificación, especialmente los siguientes:
 - La licitación de las obras de los nuevos accesos viarios y ferroviarios de ancho internacional al puerto de Barcelona.
 - La licitación de las obras necesarias para que el Puerto de Tarragona tenga una la conexión ferroviaria con ancho internacional destinado al transporte de mercancías hasta la frontera francesa (conexión Puerto de Tarragona-Castellbisbal y resolución del cuello de botella existente entre Martorell y Castellbisbal).
 - La redacción de los estudios y proyectos constructivos de acceso ferroviario en ancho internacional a las principales áreas logísticas previstas.
 - La finalización de las obras ferroviarias entre Tarragona y l'Hospitalet de l'Infant.
 - La redacción de los estudios de nuevo trazado entre Almería y Algeciras.

CUARTO CINTURÓN

3. Impulsar la finalización del Cuarto Cinturón de Barcelona (B-40), finalizando las obras entre Viladecavalls y Olesa de Montserrat durante el año 2013.

AUTOVÍAS

4. Reemprender las obras del desdoblamiento de la carretera N-II en las comarcas de Girona, iniciando la licitación de los tramos entre Tordera y Maçanet de la Selva durante el año 2011.
5. Impulsar todos los tramos de la A-27 entre Tarragona-Montblanc y la A-14 (desdoblamiento de la N-230) entre Lleida-Frontera Francesa, estableciendo un calendario concreto de actuaciones en los próximos tres meses.
6. Afrontar con urgencia la finalización completa del tramo de la A-7 entre l'Hospitalet de l'Infant y l'Almadrava.

GESTIÓN DE LAS OBRAS DEL ESTADO EN CATALUNYA

7. Delegar a la Generalitat de Catalunya, en el plazo de 3 meses, la ejecución de las obras del Estado en Catalunya, incluyendo la realización de estudios de impacto ambiental en los casos que éstos sean necesarios. Esta encomienda se iniciará con la ejecución de las obras contenidas en el Plan de cercanías de Barcelona, a causa de los retrasos acumulados.

AEROPUERTOS

8. Establecer el nuevo modelo de gestión de aeropuertos durante este año 2011, sobre las siguientes bases:
 - a) La participación determinante de representantes de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las administraciones locales y sectores económicos en los Consejos de Administración de sociedades de gestión individualizada de aeropuertos de alto volumen de tráfico y especial complejidad en la gestión. Para el caso del aeropuerto de Barcelona, esta participación determinante se trasladará al Consejo de administración de la sociedad filial responsable de la gestión de la concesión.
 - b) El traspaso de los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell a la Generalitat de Catalunya, sin que pierdan la posibilidad de realizar vuelos internacionales fuera del espacio Schengen.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N° 3

30

MEJORA DE LA ECONOMÍA PRODUCTIVA.

El Congreso de los Diputados constata que las políticas de mejora de la competitividad y crecimiento de la economía deben potenciar la capacidad de internacionalización de nuestras empresas, el incremento de las exportaciones, el fomento de la actividad industrial, el turismo, la actividad emprendedora. Para ello debe adoptarse una política decidida de apoyo, en coordinación con las Comunidades Autónomas, que contemple por parte del Gobierno del Estado:

1. Apoyo a la política industrial. Potenciar las líneas de financiación del ICO para financiar el circulante de empresas industriales exportadoras, así como para la adquisición de activos fijos de empresas internacionalizadas para su proceso de multilocalización.
2. Impulso a las actividades de I+D+i. Recuperar el ritmo de crecimiento del gasto público destinado a actividades de I+D+i, como instrumento básico de reactivación y de cambio de modelo de actividad productiva. Ello requiere, además, reforzar el apoyo fiscal a dichas actividades, para que las deducciones puedan considerarse también como crédito fiscal; la adecuada articulación de la llamada "compra pública innovadora" y la revisión y desarrollo de instrumentos de estímulo a la innovación, como el capital riesgo y los inversores de proximidad o Business Angels.
3. Fomentar el sector turístico, especialmente en relación a mercados emergentes, así como el establecimiento de nuevos incentivos temporales a la reinversión y el incremento de las ayudas financieras dirigidas a estimular la modernización y el incremento de la calidad y la diversificación del sector turístico
4. Apoyo al emprendedor. Impulsar un conjunto de medidas laborales, financieras, fiscales y de simplificación administrativa de apoyo a los emprendedores, a la consolidación y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, así como a los trabajadores que, entre otras, contemplen:
 - a. La bonificación de las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos que creen su propio empleo y de las pequeñas empresas que creen empleo.
 - b. El impulso de las figuras de los Business Angels, el mediador de crédito, las sociedades de garantía recíproca, los créditos participativos, el capital riesgo y las líneas ICO o bien la reserva de crédito para pequeñas empresas por parte de las entidades financieras beneficiarias de ayudas públicas. Compras públicas, el estímulo a la capitalización bursátil en los mercados secundarios o también las medidas destinadas a facilitar la

emisión de pagarés y bonos por parte de las PYMES para facilitar su financiación.

- c. La rebaja de tipos más reducidos del Impuesto sobre Sociedades que los actuales para las pequeñas y medianas empresas.
 - d. Simplificar los procesos de creación de empresas y las obligaciones en el transcurso de su actividad, así como impulsar figuras jurídicas de limitación de responsabilidades del emprendedor individual.
5. Política energética eficiente y sostenible. Presentar urgentemente el informe relativo a las medidas necesarias para el desarrollo e implementación de las conclusiones aprobadas por la Subcomisión de análisis de la estrategia energética española para los próximos 25 años, así como su calendario, con el objetivo de articular un marco estable capaz de reducir progresivamente la dependencia energética, garantizar una alta calidad de servicio, avanzar en la eficiencia y ahorro energéticos, incrementar las interconexiones eléctricas con nuestros países vecinos, diversificar las fuentes de producción con un mayor peso de las renovables y sin excluir ninguna fuente disponible.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N° 4

MÁS LIQUIDEZ PARA PYMES Y AUTÓNOMOS.

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar medidas destinadas a facilitar liquidez a la actividad económica, especialmente el destinado a las pequeñas y medianas empresas y autónomos, mediante, entre otras, las siguientes medidas:

- Reducir el coeficiente de solvencia exigido a las instituciones financieras, destinando una gran parte de los recursos económicos liberados a la financiación y liquidez de la actividad económica para garantizar su desarrollo.
- Instar en el seno de la Unión Europea una política más expansiva de liquidez por parte del Banco Central Europeo para favorecer el flujo financiero a la actividad económico, con el establecimiento de líneas de liquidez a medio y largo plazo a favor de las entidades de crédito, con el aval del Estado o de las Comunidades Autónomas, que garanticen la obtención de financiación de crédito según el volumen de fondos destinados por cada una de ellas a la actividad crediticia de PYMES y autónomos.
- Adecuar el sistema de devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido en función de la morosidad que esté sufriendo el sujeto pasivo en sus operaciones comerciales y profesionales.
- Impulsar un pacto de las Administraciones públicas para evaluar y reconocer a sus suministradores de bienes y servicios los compromisos pendientes de pago, negociar las condiciones para realizar su pronto pago y cumplir en sus operaciones comerciales con los plazos previstos en la nueva Ley de morosidad.
- Revisar el funcionamiento de la línea ICOdirecto a fin de posibilitar que un mayor número de demandas de financiación por parte de Pymes y autónomos la obtengan, alcanzado los objetivos para los que fue creada.
- Articular una línea de crédito del ICO a las administraciones locales destinada al pago de las facturas que estos tengan pendientes de pago con PYMES y autónomos, tal como ya preveía la Ley 15/2010 de lucha contra la morosidad.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N° 5.

32

SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a convocar con urgencia el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con el objetivo de abordar un debate monográfico sobre la sostenibilidad del sistema sanitario que incluya la valoración de propuestas destinadas a:

- a) garantizar una mejora de los ingresos finalistas destinados a la financiación de la sanidad.
- b) definir los criterios que permitan limitar el futuro crecimiento del gasto en el ámbito sanitario.

33

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N° 6

AVAL DE LAS EMISIONES DE DEUDA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a avalar las emisiones de deuda de las Comunidades Autónomas autorizadas de acuerdo con objetivos de estabilidad y los límites de endeudamiento que se derivan de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal, así como asumir su gestión, a través de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N° 7.

34

CULMINAR LA REFORMA LABORAL, IMPULSAR LA CREACIÓN DE EMPLEO.

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a introducir durante el año 2011 las siguientes medidas de impulso al mercado de trabajo:

REFORMA DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS

La cual deberá establecer nuevos incentivos para la generación de ocupación a corto plazo, con medidas como:

1. La subvención directa de 5.000 euros en los costos de contratación de un nuevo trabajador, la ampliación a todos los colectivos de la capitalización del 100% de la prestación de desempleo para el inicio de una actividad empresarial y la reducción de las cotizaciones sociales a cuenta del desempleo pendiente de cobrar
2. Aplicación de una bonificación del 100% de las cotizaciones sociales a los nuevos trabajadores autónomos durante el primer año, así como para el primer asalariado que contraten.
3. Extensión de las bonificaciones para el mantenimiento de la ocupación a los trabajadores mayores de 55 años.
4. Revisar la legislación de los contratos a tiempo parcial con el objetivo que su utilización permita una mayor flexibilidad en la organización de la jornada para favorecer la adaptabilidad de las empresas a las variaciones del proceso productivo, y se adapte a las necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar. Esta reforma deberá incluir, además, una mejora del régimen de protección social de este tipo de contratos y posibles incentivos a las empresas.
5. Promoción, en el marco del Diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales, las iniciativas que correspondan para favorecer el teletrabajo. Para ello, el Gobierno presentará, en el plazo de seis meses, un estudio que analice la situación actual del teletrabajo y la existencia de problemáticas causadas por la falta de adaptación legislativa a las peculiaridades del teletrabajo.
6. Mejora del tratamiento fiscal en el gasto de formación que realicen los trabajadores, con el objetivo de incrementar los recursos globales del sistema de formación para la ocupación.

REFORMA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

La cual deberá conseguir la creación de condiciones más favorables para:

7. Facilitar una mayor vinculación entre sueldos y productividad en los convenios colectivos.
8. Mejorar las posibilidades de flexibilidad interna de las empresas, la mejora de las herramientas para combatir el absentismo laboral y la reformulación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo.
9. Clarificar la prioridad de los convenios de ámbito autonómico frente a los de carácter estatal, sin que estos últimos puedan vetar la existencia de otros de ámbito territorial, así como las partes que continúan vigentes en la fase de ultraactividad.
10. Revisar los plazos de prórroga de los convenios en situaciones excepcionales.
11. Facilitar el descuelgue de aquellas PYMES que así lo requieran.

MEDIDAS DE IMPULSO AL TRABAJO A TIEMPO PARCIAL Y AL TELETRABAJO

12. En los próximos años debemos doblar el porcentaje de empleos a tiempo parcial como instrumento clave para el reparto del empleo y la reducción del paro. A tal efecto:

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar la legislación de los contratos a tiempo parcial y del teletrabajo, con el objetivo que su utilización permita una mayor flexibilidad en la organización de la jornada para favorecer la adaptabilidad de las empresas a las variaciones del proceso productivo y se adapte a las necesidades sociales de conciliación de la vida laboral y familiar. Para ello, en el plazo de tres meses, el Gobierno presentará un Proyecto de Ley en el que incluirá, entre otras, las siguientes reformas:

- Facilitar y flexibilizar la regulación en la utilización de las horas complementarias en el contrato a tiempo parcial.
- Incorporar incentivos a las empresas para la utilización de la contratación indefinida mediante este tipo de contratos.
- Mejorar la protección social mediante el incremento del coeficiente multiplicador establecido actualmente para causar derecho a las pensiones de jubilación e incapacidad permanente.
- La adaptación de la normativa laboral a los problemas derivados de la falta de regulación específica adaptada a las peculiaridades del teletrabajo y a la jurisprudencia asociada al mismo.

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL PARO JUVENIL

Que contemple, además de las medidas ya especificadas de reforma de las políticas activas, de potenciación del empleo a tiempo parcial y del teletrabajo, otras medidas de apoyo al joven emprendedor, entre estas:

13. Medidas financieras y fiscales destinadas a financiar la puesta en funcionamiento de proyectos empresariales, por parte de jóvenes, potencialmente viables y creadores de ocupación.
14. Nuevas medidas de simplificación administrativa, tanto para los procesos de creación de empresas como para la creación de figuras societarias con limitación de responsabilidad para el emprendedor individual.
15. Reforzar la utilización de contratos a tiempo parcial como mecanismo para combinar empleo y formación.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N° 8

35

MÁS IMPULSO A LAS POLÍTICAS SOCIALES

1. MEJORA DEL SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en materia de Dependencia a:

- Establecer un sistema de financiación para la atención a las personas en situación de dependencia y para la promoción de la autonomía personal en base a los siguientes parámetros:
 - o La Administración General del Estado aportará el 50% del gasto real realizado y acreditado por las Comunidades Autónomas y Territorios forales en atención a la dependencia y promoción de la autonomía personal.
 - o A través de convenios o en el caso de los Territorio Forales, mediante la correspondiente deducción del cupo, el Estado y las CC.AA acordarán el marco de cooperación financiero que en todo caso, podrá ir siendo ampliable para lograr una financiación estable y suficiente.
- Presentar en el plazo de 2 meses un informe específico que analice la aplicación de los artículos 18, 19 y similares, relativos a la oferta de prestaciones económicas frente a prestación de servicios, de la Ley 39/2006, y las consecuencias derivadas de los mismos, así como, las propuestas de modificación que de ello se deriven para favorecer la creación de empleo en la atención a la dependencia.
- Impulsar la presentación, en un plazo máximo de 3 meses, de la evaluación de la aplicación de la Ley 39/2006 de Dependencia y de las modificaciones que en su caso, se estimen procedentes, tal y como establece el apartado 4 de la Disposición final primera de citada Ley.

2. POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN

El Congreso de los Diputados considera necesario reforzar la plena integración social y laboral de las personas inmigrantes en situación legal. Se pretende conseguir una sociedad con más cohesión, en la cual se tenga en cuenta el esfuerzo integrador del inmigrante, el conocimiento de las lenguas que se hablan en el Estado y el hecho de compartir los valores básicos de la sociedad de acogida.

Al mismo tiempo, hay que evitar un incremento de las personas inmigrantes en situación irregular.

Para todo ello, insta al Gobierno a:

- Impulsar las medidas pertinentes para garantizar la eficacia en el control de las fronteras terrestres y aéreas y el retorno de aquellas personas que se encuentren en situación administrativa irregular.
- Promover, de común acuerdo con las Comunidades Autónomas, políticas activas de ocupación orientadas, de manera prioritaria, a la formación de los trabajadores extranjeros en situación de desempleo, incentivando el conocimiento de las lenguas oficiales reconocidas en la Comunidad Autónoma en la cual residen, como instrumento indispensable para la integración en la sociedad de acogida y la incorporación al mercado de trabajo.
- Garantizar la dotación en 100 millones de euros del Fondo de apoyo a la acogida y la integración de inmigrantes así como al refuerzo educativo de los mismos
- Mejorar la financiación de las políticas de integración que efectúan los ayuntamientos, sea mediante actuaciones de acogida e integración, sea mediante inversiones para la regeneración urbana, vinculadas a la integración de la inmigración.
- Dotar a los ayuntamientos de instrumentos jurídicos y medios materiales para impedir la sobreocupación de viviendas.
- Impulsar la existencia de criterios comunes para empadronar a ciudadanos extranjeros que vivan en los municipios.

3. POLÍTICAS DE COOPERACIÓN

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Mantener el compromiso de destinar el 0,7% del PIB a Ayuda Oficial al Desarrollo en 2015, a pesar de la crisis.
- Reforzar de forma urgente, las capacidades institucionales y humanas de la cooperación española para conseguir un uso más eficaz de los recursos, poniendo especial énfasis en la investigación y la innovación, en la modernización de la gestión, en la racionalización de las estructuras existentes, y en el incremento de la predictibilidad.
- Adoptar las medidas oportunas para que los organismos públicos del Estado incrementen la transparencia publicando el máximo de información posible sobre los programas y proyectos de cooperación al desarrollo que financian, los informes de seguimiento correspondientes y las evaluaciones externas realizadas, y sobre los criterios concretos y objetivamente medibles que utilizan para la selección de los canalizadores y

receptores de su ayuda. Entre los citados criterios deben figurar el respeto a los derechos humanos, la eficacia y a su vez, la transparencia de su gestión.

- Incrementar su compromiso con mecanismos innovadores de financiación.

4. POLÍTICAS CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL, ESPECIALMENTE INFANTIL

El Congreso de los Diputados urge al Gobierno a incrementar, antes de finalizar la legislatura, los esfuerzos dedicados a aumentar las oportunidades y los recursos de las personas en riesgo de pobreza y de exclusión social, especialmente infantil. En este sentido y teniendo en cuenta la distribución de competencias en materia de protección y política social, el Gobierno debería:

- aprobar, sin más demora, un nuevo Plan de Inclusión Social para el período 2011-2013 para hacer frente al empeoramiento de la situación económica y al aumento de la pobreza y la exclusión social, siguiendo la estrategia europea para la inclusión social.
- reforzar la cooperación con las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales para implementar actuaciones destinadas a hacer frente a la pobreza infantil.
- proceder, lo más ágilmente posible, a territorializar por Comunidades Autónomas los recursos recaudados en la asignación tributaria del IRPF destinada a otros fines de interés social y a ceder a cada comunidad un mínimo del 50 por ciento de la recaudación que se haya obtenido en las declaraciones efectuadas en su territorio, en concepto de la citada asignación, garantizando que los recursos correspondientes al referido tramo sean gestionados íntegramente por los respectivos gobiernos autonómicos.
- apoyar y reforzar la labor que realiza el tercer sector en contra de la pobreza y la exclusión pero también, como sector en el que trabaja el 10% del empleo estatal.
- apoyar la actividad que desarrollan los Bancos de Alimentos en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, y abordar de forma urgente la modificación de los procedimientos para la licitación de alimentos destinados a estas entidades, con la finalidad de agilizarlos y mejorar su eficiencia.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N° 9.

ATENCIÓN A LOS PROBLEMAS SOCIALES DE LA VIVIENDA

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Medidas destinadas a paliar los impagos hipotecarios:

1. Establecer incentivos fiscales que fomenten la resolución de los impagos hipotecarios a través de la dación de la vivienda para la cancelación total de la deuda, en el que se incluya además la posibilidad de permanencia en la vivienda en régimen de alquiler. Esta práctica debería incorporarse en las actuaciones de Responsabilidad Social Corporativa de las memorias anuales de las entidades financieras.
2. Incrementar las cuantías fijadas actualmente como inembargables en sueldos, pensiones o retribuciones equivalentes que responden de la deuda pendiente de una hipoteca ejecutada, en el caso de la vivienda única y residencia habitual y especialmente, para que tenga en cuenta las cargas familiares existentes.
3. Incentivar que las entidades bancarias ofrezcan la constitución de hipotecas que contemplen que la obligación garantizada se realiza únicamente sobre el bien hipotecado (dación en pago).
4. Acelerar la introducción de las subastas judiciales electrónicas, que complementen la licitación presencial mediante licitadores que realicen sus pujas a través de Internet, en todas las subastas de los bienes inmuebles procedentes de ejecuciones hipotecarias, con el objetivo de ampliar el número potencial de licitadores y, consecuentemente, las posibilidades de que la subasta no quede desierta.
5. Incrementar el porcentaje de valoración del inmueble hipotecado, hoy establecido en el 50% en la Ley de enjuiciamiento civil, por el que el inmueble puede ser adjudicado al creditor, en caso que la subasta quede desierta.

Medidas sociales destinadas a paliar el impago temporal de alquileres e hipotecas:

6. La constitución de un Fondo, financiado por el Estado y gestionado por las Comunidades Autónomas, para atender el impago temporal de las rentas del alquiler o cuotas hipotecarias de la vivienda habitual para personas en situación de alta vulnerabilidad social, previendo la devolución de las cantidades anticipadas por el Fondo una vez que los beneficiarios superen la situación de necesidad que motivó la percepción de las ayudas.

Medidas destinadas a reforzar las políticas públicas de acceso a la vivienda:

7. Revisar en profundidad el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación con el fin de propiciar la existencia de un amplio parque de viviendas públicas, especialmente en régimen de alquiler, que facilite el derecho constitucional de acceso a la vivienda.
8. Adaptar el Plan de Vivienda 2009-2012 a las actuales necesidades sociales, mediante la incorporación de las siguientes medidas:
 - a. Restablecer el fondo de eficacia en aquellas líneas de ayudas que se agoten durante el año 2011 por superar las actuaciones previstas, especialmente las destinadas a la rehabilitación y a la promoción de viviendas protegidas en régimen de alquiler.
 - b. Revisar las dotaciones presupuestarias destinadas a la financiación del Plan de Vivienda.
9. Redefinir la línea ICO moratoria de hipotecas, con una dotación no utilizada de casi 6.000 millones de euros, para destinarla a financiar las políticas de vivienda que incrementen el parque público de viviendas disponibles y permita articular soluciones a los nuevos colectivos con riesgo de exclusión.
10. Impulsar acuerdos de colaboración público-privado para la movilización del stock de viviendas vacías a precios asequibles, que den respuesta a las necesidades de acceso a la vivienda.
11. Restablecer la aportación al Plan de Remodelación de Barrios de Catalunya con una dotación similar a la otorgada en los últimos ejercicios presupuestarios.

Medidas destinadas a favorecer las actividades de rehabilitación:

12. Revisar los estímulos a la rehabilitación de edificios y viviendas. Reducir los trámites administrativos para el acceso a las ayudas y ampliar el concepto fiscal de rehabilitación para abarcar todas las modalidades de intervención para la mejora y mantenimiento de los edificios y de las viviendas.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N° 10.**POR UNA AGRICULTURA Y PESCA QUE DE RESPUESTA A LOS NUEVOS RETOS**

La Unión Europea está inmersa en un intenso debate que debe concluir el año 2013 con una nueva formulación de las bases de la Política Agraria Común (PAC) hacia el futuro. El Estado español debe garantizar que las inquietudes de las CCAA, a pesar de no tener una participación directa en los órganos de representación de la Unión Europea, puedan incorporarse en el proceso de elaboración de la PAC, teniendo en cuenta la vital importancia del tema para el futuro del sector agrario.

En este sentido, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a trabajar, entre otras prioridades para:

1. Dotar a la PAC con un presupuesto y una política comercial (aranceles, acuerdos terceros países, etiquetado, exigencias sanitarias y de bienestar animal) que responda al carácter estratégico del sector agrario para la UE.
2. Concretar en la PAC el tratamiento que se efectuará a los derechos especiales, primando en cualquier caso que el valor medio de los derechos se establezca por CCAA, y estableciendo unos derechos especiales para aquellas explotaciones ganaderas que no tienen base territorial, ligadas con el censo de las explotaciones.
3. Incluir en el segundo pilar de la PAC las medidas para la compensación de desventajas naturales para evitar cargas administrativas adicionales que complican sobremanera la gestión de las ayudas directas, yendo en contra de concepto de simplificación que se tiene como objetivo.
4. Considerar en el nuevo marco de apoyo de forma igual que a los cultivos extensivos a sectores tales como la huerta, la viña, los cítricos o la fruta fresca, en relación al esquema de de ayudas desacoplados de la producción.
5. Regionalizar la programación del desarrollo rural, apoyada en un marco estratégico comunitario único para todos los programas operativos, sin la reserva de eficacia que propone la UE y que introduzca medidas de simplificación en la gestión de los programas.
6. Potenciar el modelo público / privado de asesoramiento técnico-económico a las empresas agrarias, como elemento clave en la mejora de la competitividad y como herramienta fundamental de aplicación de la PAC.

REFORMA DE LA POLÍTICA PESQUERA COMÚN

7. Adoptar una posició comú en relació al establiment de un règimen diferenciado para la pesca litoral Mediterránea en la futura Política Pesquera Común en la misma línea que la posición común firmada el 31 de mayo de 2011 por Francia, Irlanda, Italia, Portugal y España sobre el futuro del instrumento financiero de la Política Común de la Pesca.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N° 11.**MEJORAR Y TRASPASAR LA GESTIÓN DE LAS BECAS, LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y COMBATIR EL FRACASO ESCOLAR.**Mejorar y traspasar la gestión de las becas.

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- a) Incrementar anualmente el número y cuantía de las becas y ayudas al estudio de nivel superior, para equiparar, en el menor tiempo posible, la inversión del Estado en esta materia a la media comunitaria.
- b) Proceder, con carácter urgente, al traspaso a la Generalitat de Catalunya del pleno ejercicio de las competencias de gestión de las becas y ayudas concedidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, en cumplimiento de la STC 188/2001, de 20 de septiembre, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 172.1 del Estatuto de Autonomía de Catalunya.
- c) Introducir, al establecer los criterios de selección de los beneficiarios de las convocatorias del sistema general de becas, préstamos y otras ayudas al estudio superior con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, criterios correctores en función del coste de la vida estimado para cada una de las Comunidades Autónomas que garanticen una igualdad real en el acceso de todos los estudiantes a estas ayudas públicas.

Mejorar la calidad de la educación y combatir el fracaso escolar.

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Reelaborar los requisitos de formación inicial y permanente del profesorado, con el fin que éste mantenga una alta acreditación profesional, avanzando en el diseño de una carrera docente
2. Presentar, en el plazo de 60 días, las evaluaciones de los diversos planes emprendidos para hacer frente al elevado porcentaje de abandono y fracaso escolar, así como el conjunto de indicadores y objetivos mesurables y evaluables con el fin que el objetivo pueda afrontarse con mayor eficacia, en el contexto de la estrategia de la Unión Europea para el empleo y un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, aprobado por el Consejo Europeo el 17 de junio de 2010
3. Presentar, en el plazo de 60 días, el estudio requerido por la comisión de educación al Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar relativo al papel de los directores de centros educativos en la resolución de conflictos y en aquellas problemáticas que afectan al buen clima escolar, a la luz de la experiencia habida, en las Comunidades Autónomas en los últimos años.
4. Presentar, en el plazo de 60 días, las conclusiones de la Comisión prevista por la Ley Orgánica de Educación para evaluar el coste del módulo de la escuela concertada.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N° 12.

ADMINISTRACIÓN ÚNICA Y ADAPTACIÓN DE LA JUSTICIA A LA ESTRUCTURA AUTONÓMICA DEL ESTADO.

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Adaptación del Poder Judicial a la estructura autonómica:

- Cumplir el compromiso adquirido ante la Cámara de presentar el Proyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que desarrolle legislativamente las medidas que, en el ámbito de la Justicia, prevén de manera expresa los nuevos Estatutos de Autonomía. De manera concreta, deberán desarrollarse legislativamente las previsiones para otorgar a los Tribunales Superiores de Justicia las nuevas competencias en materia de casación, creación de los Consejos de Justicia de ámbito autonómico y nueva asunción de competencias de las Comunidades Autónomas en el ámbito de los medios personales y materiales y en la definición de la Planta Judicial en sus respectivos territorios.

Modelo de Administración Única

- Avanzar de forma decisiva en el principio de simplificación de la Administración periférica del Estado, reduciendo organismos y evitando duplicidades. A tal efecto, y de acuerdo con el principio general que las administraciones autonómicas son Estado, éstas deben ser, siguiendo el modelo previsto por la Disposición Adicional sexta del Estatuto de Catalunya, las administraciones ordinarias del Estado en sus respectivos territorios, transfiriendo, mediante los instrumentos que correspondan, las funciones ejecutivas que actualmente ejerce la Administración del Estado a través de sus órganos territoriales.

Supresión del Ministerio de Cultura

- Suprimir el Ministerio de Cultura, evitando duplicidades y atendiendo al ámbito competencial que corresponde a las Comunidades Autónomas.

Acceso de las policías autonómicas a todas las bases de datos:

- Facilitar el pleno acceso de las policías integrales autonómicas en las distintas bases de datos estatales, en el Tratado de Schengen, en el Convenio de Blois de actuación transfronterera, así como su participación en INTERPOL y EUROPOL.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N° 13.

**PLAN DE AUSTERIDAD, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA,
TRANSPARENCIA Y ENTES LOCALES**

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Simplificar los trámites administrativos que afectan a la ciudadanía y a las empresas, con el objetivo que no sea necesario presentar ningún documento que ya obre en poder de la Administración General del Estado antes de la finalización del año 2012.
2. Realizar, en el plazo de seis meses, un estudio sobre la participación de agentes privados en aquellas empresas públicas susceptibles de incorporarlos mediante la venta de paquetes accionariales, replanteando la necesidad de mantener las actuales participaciones accionariales del Estado, principalmente las de SEPI. Dicho estudio se remitirá a la Comisión de Economía y Hacienda.
3. Reducir en al menos un 25% los gastos en publicidad, incluidas las campañas de carácter comercial, correspondientes a las actuaciones de la Administración General del Estado, ya sean la de los propios Ministerios o la de los entes vinculados a ellos.
4. Presentar, antes del 1 de enero de 2012, un Proyecto de Ley de modificación de la financiación local, con el objetivo de afrontar las reformas estructurales que deben contribuir a incrementar los recursos económicos y la capacidad financiera de las corporaciones locales.
5. Facilitar, de manera puntual y precisa, a las Cortes Generales toda la información necesaria que permita desarrollar adecuadamente la nueva Oficina Presupuestaria de las Cámaras, estableciendo los mecanismos de colaboración necesarios para que pueda iniciar las funciones encomendadas durante el año 2012.
6. Presentar un estudio sobre el futuro de las Diputaciones Provinciales, con la finalidad de simplificar los actuales niveles de la administración pública.
7. Evitar costes de funcionamiento innecesarios para la administración, como los que han supuesto las improvisaciones evidenciadas con el cambio de los límites de velocidad.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N° 14.

41

IMPULSO AL MECENAZGO

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar o apoyar la modificación de la Ley de mecenazgo con el fin de reforzar la colaboración entre el sector público y el sector privado en actividades de interés general, sea en el ámbito social y educativo, sea en el ámbito de las actividades culturales y deportivas, sea en el ámbito de la investigación, desarrollo e innovación.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N° 15

42

**RECONOCIMIENTO DEL CATALÁN COMO LENGUA OFICIAL DE LA
UNIÓN EUROPEA Y DE CATALUNYA COMO CIRCUNSCRIPCIÓN
ELECTORAL EUROPEA**

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proyectar en la Unión Europea su carácter plurinacional, a estos efectos:

1.- De acuerdo con las disposiciones relativas al régimen lingüístico de la Unión Europea, a su compromiso de respetar la diversidad lingüística y cultural y los derechos de sus ciudadanos en esta materia, insta al Gobierno a aprovechar las reformas normativas que se llevarán a cabo en el Tratado de la Unión Europea y en el Reglamento 1/58 (Reglamento nº 1 por el que se fija el Régimen Lingüístico de la Comunidad Económica Europea DO P 17 de 6.10.1958, p.385) con motivo de la adhesión de Croacia a la Unión Europea, para conseguir que el Catalán cuente con el estatus de lengua oficial de las instituciones de la Unión.

2.- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar un Proyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que tenga por objeto permitir la existencia de circunscripciones electorales de ámbito autonómico, siempre que el respectivo Parlamento de la Comunidad Autónoma así lo acuerde y el número de habitantes de la misma permita cumplir el criterio de representación proporcional. Con ello se da cumplimiento a la Resolución A4-212/98 y otras del Parlamento Europeo, la cual se manifiesta favorable a la existencia de más de una circunscripción en aquellos Estados con más de 20 millones de habitantes, con el fin de aproximar los elegidos a los electores.